

**PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ACTUACIÓN UNIFICADA
PARA SITUACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL
CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

Autora:

Dra. Adriana Monesterolo Lencioni
Consultora UNICEF

Con la colaboración de:

Dra. Dayana Ojeda Moreno, Psicóloga
Lcda. Carmen Carro Pérez, Trabajadora Social

5 de Marzo de 2020

Índice:

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ACTUACIÓN UNIFICADA	5
INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO PRIMERO	7
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	7
1.1. LA NECESIDAD DE COMPRENDER LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE MANERA INTEGRAL	7
1.2. LA VIOLENCIA BAJO LA LUPA DE LA DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL	9
1.3. LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL	10
1.4. ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL	13
1.5. LAS VÍCTIMAS Y SUS DERECHOS ESPECÍFICOS	15
CAPÍTULO SEGUNDO	17
LA PROTECCIÓN INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	17
2.1. COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES	19
2.1.1. FUNCIÓN EJECUTIVA	20
2.1.2. FUNCIÓN JUDICIAL	29
2.1.3. JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	35
2.2. NECESIDAD DE ARTICULAR LAS ACTUACIONES INSTITUCIONALES	36
CAPÍTULO TERCERO	39
DETECCIÓN, DERIVACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	39
3.1. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN	39
3.2. PAUTAS PARA EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN	40
3.3. ACTUACIÓN ARTICULADA EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES	45
3.4. ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL EN DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	51
3.5. MIRADAS NECESARIAS PARA ACOMPAÑAR LAS ETAPAS	51
3.6. ETAPA DE LA DETECCIÓN	52
3.7. ETAPA DE LA DERIVACIÓN	63
3.8. ETAPA DE LA ATENCIÓN	69

3.9. FLUJOGRAMA DE UNIFICACIÓN DE LAS TRES ETAPAS: DETECCIÓN, DERIVACIÓN Y ATENCIÓN	78
BIBLIOGRAFÍA	80
ANEXOS	81

Glosario de siglas

CDI: Centros de Desarrollo Infantil

CDN: Convención de los Derechos del Niño

CNH: Creciendo con Nuestros Hijos

CNII: Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional

COESCOPE: Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público

COFJ: Código Orgánico de la Función Judicial

CONA: Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia

COIP: Código Orgánico Integral Penal

DECE: Departamento de Consejería Estudiantil

DINAPEN: Policía Especializada de niños, niñas y adolescentes

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural

MINEDUC: Ministerio de Educación

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social

MSP: Ministerio de Salud Pública

MCD: Ministerio de Cultura y Deporte

NNA: Niña, niño, adolescente

PN: Policía Nacional

SDDHH: Secretaría de Derechos Humanos

SNDPINA: Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la niñez y adolescencia

SEIMLCF: Sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses

SPA: Salas de Primera Acogida

SPI: Servicios de Protección Integral

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés)

VS: Violencia sexual

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ACTUACIÓN UNIFICADA

INTRODUCCIÓN

El procedimiento especial de actuación unificada para situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes surge del compromiso del Consejo de la Judicatura y UNICEF por garantizar los derechos de la niñez y adolescencia y particularmente el de protección integral y no re victimización, por lo que su objetivo es generar una actuación unificada y articulada de todos los actores e instituciones que intervienen en situaciones de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Para el diseño de este procedimiento especial de actuación se ha tomado como punto de partida los obstáculos en el ejercicio de los derechos y que constituyen nudos críticos en la detección, derivación y atención de situación de violencia sexual contra una niña, niño o adolescente, los cuales impiden una respuesta efectiva. Estos nudos se encuentran en distintos niveles y de modo general se enuncia a continuación:

- La concurrencia de normas legales y otros cuerpos normativos de inferior jerarquía con protocolos institucionales y sectoriales, respecto al tema que nos ocupa, inconexas unas con otras, es decir, generadas aisladamente.
- La existencia de procesos y procedimientos institucionales que son revictimizantes, ya que la niña, niño o adolescente debe pasar por diversas instancias y profesionales que le solicitan la misma información varias veces sin tener en cuenta la situación de violencia sexual vivida y las necesidades específicas al momento que está viviendo la persona del niño, niña y adolescente.
- Con respecto al personal, se observa un recurso humano que requiere de capacitación permanente y continúa, sobre su rol, sus atribuciones, el alcance de su intervención, así como formación sobre el trato y actitudes frente a la relación que establece con las niñas, niños y adolescentes que han sufrido una situación de violencia sexual y el realizar un abordaje más humanizado dentro de sus competencias.

Por lo anterior, este procedimiento tiene como propósito establecer las condiciones para evitar la revictimización, aun cuando se constata la dificultad existente respecto al insuficiente personal para realizar todo el proceso de protección integral para que culmine de una forma positiva para el niño, niña y adolescente, sin que abandone el proceso en el camino y sea reconocido se derecho a la reparación integral.

El eje central de este procedimiento es la persona del niño, niña y adolescente que ha vivido una situación de violencia sexual y requiere de protección, y la necesidad de que las actuaciones institucionales garanticen su seguridad personal, la protección integral y el acceso al sistema de administración de justicia, en el marco de la justicia especializada de la niñez y adolescencia establecida en el artículo 175 de la Constitución.

Finalmente, el Procedimiento especial de actuación unificada pretende contribuir al desarrollo de la especificidad de la niñez y adolescencia sea en la comprensión y aplicación de las normas

jurídicas, como en el trato digno y diferenciado que deben brindar a la niña, niño y adolescente, de acuerdo con su edad y desarrollo, individualidad y condiciones.

CAPÍTULO PRIMERO

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

1.1. LA NECESIDAD DE COMPRENDER LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE MANERA INTEGRAL

La violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes es una violación de sus derechos. Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Toma la forma de abuso sexual, acoso, violación, corrupción de menores, pornografía infantil, explotación sexual o turismo sexual, etc. Puede ocurrir en el ámbito familiar, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, dentro de las comunidades, en contextos de desarrollo y de emergencia, también puede darse la violencia sexual por parte de cualquier profesional independiente o autónomo. Cada vez más, los celulares e internet también ponen a los niños, niñas y adolescentes en riesgo de violencia sexual. También hay un aumento en el número y la circulación de imágenes donde se producen actos de abuso de niños, niñas y adolescentes.

La verdadera magnitud de la violencia sexual está oculta, debido a su naturaleza sensible, clandestina e ilegal. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes, y los miembros de su familia no denuncian las situaciones de violencia sexual a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades. La tolerancia social y la falta de conciencia también contribuyen a que no se denuncien muchos de los casos.

Las pruebas indican que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no sólo para las niñas, niños y adolescentes, sino también para sus familias y comunidades. Esto incluye los riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, discriminación y dificultades en la escuela, entre otros.

Cualquier forma de violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes es un problema social que tiene consecuencias en su vida, en su entorno y en todos y cada uno de los contextos en los que el niño, niña o adolescente se desarrolla. De ahí que los ámbitos para la intervención en la protección de los niños, niñas y adolescentes contra este tipo de violencia incluyan, desde la familia y su entorno social, a los ámbitos educativo, sanitario y policial, así como el legislativo y de políticas públicas.

Una de las circunstancias que inciden en la recuperación de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual es la respuesta -institucional o del medio social inmediato- que recibe ante la revelación, el descubrimiento o la denuncia de esta situación de violencia. Por tanto, en este sentido, es importante promover:

- Un fácil acceso a la justicia, con actuaciones efectivas, rápidas y coordinadas.
- La atención de calidad en salud -mental y física.
- Unos servicios especializados apropiados a las necesidades específicas de estas niñas, niños y adolescente.
- La formación de profesionales capacitados para la evaluación psicológica y la intervención específica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Es importante ante la revelación, el descubrimiento o la denuncia de cualquier situación de violencia se dicten e implementen medidas de protección inmediatamente de tener conocimiento del hecho; estas medidas de protección tienen que tener el carácter de:

- Inmediatez: medidas que se dictan e implementen cuando se conoce el hecho, bien sea por revelación, descubrimiento o denuncia.
- Proceso: la niña, niño o adolescente requiere diversas, distintas y varias medidas de protección a lo largo de todo el proceso, que garanticen su recuperación y su desarrollo integral.

Para dictar las medidas pertinentes y oportunas que requiere la persona del niño, niña y adolescente, así como para su implementación y ejecución, es necesario un diagnóstico-análisis de todas las dimensiones de la persona de la niña, niño, adolescente. A continuación, se presentan, de manera gráfica, todas estas dimensiones. Por un lado, se encuentra el área de desarrollo personal que comprende las dimensiones: cognitivo-intelectual, afectivo-emocional, autonomía personal, físico-salud, habilidades sociales, espiritual-trascendental; y por otro lado, el área de contextos significativos, que comprende las dimensiones: familiar, escolar, comunitario, vivienda, acceso a justicia, acceso a salud, laboral, ocio y tiempo libre.

Ambas áreas, con sus respectivas dimensiones, requieren de medidas de protección, que podrán ser inmediatas y de proceso para el desarrollo integral de la persona de la niña, niño, adolescente, todas las medidas que se implementen configuran la protección integral ante la situación de la violencia sexual vivida.



Autora: Adriana Monesterolo Lencioni (2020)

Gráfico 1: **Dimensiones y contexto del desarrollo integral de la niña, niño y adolescente**

1.2. LA VIOLENCIA BAJO LA LUPA DE LA DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL

Ha quedado sustentado que la violencia afecta de diferente manera y grado al desarrollo integral del niño, concepto introducido por la Convención sobre los Derechos del Niño que se comprende en el marco de la Doctrina de la Protección Integral, que ha convertido a las niñas, niños y adolescentes en sujetos plenos de derechos.

La Corte Constitucional¹ ha definido la **doctrina de la protección integral** como “el conjunto de normas e instrumentos jurídicos y doctrinas elaboradas por los órganos de protección de derechos humanos, que tienen como **finalidad desarrollar el contenido y el alcance de los derechos de los niños, niñas y adolescentes**. Entre los instrumentos que conforma la doctrina de la protección integral se encuentran la CDN, las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, la jurisprudencia de la Corte IDH sobre derechos de los niños, la Declaración sobre los Derechos de los Niños”.

La violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes vulnera los derechos a la dignidad, a la integridad personal física, psicológica, cultural, afectiva y sexual (CNA, art 50), a gozar de una vida libre de violencia en el ámbito público y privado (CRE, art. 45 y 66.3) y al **desarrollo integral**, el cual por mandato constitucional es **responsabilidad prioritaria** del Estado, la sociedad y la familia y **derecho constitucional específico** de la niñez y adolescencia “entendido como proceso

¹ Corte Constitucional, Sentencia N.9-17-CN de 9 de julio de 2019, N 43.

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales” (CRE, art. 44), sin perjuicio de otros por la interrelación que existe entre los derechos, como se irá develando a lo largo de este Procedimiento Especial de Actuación Unificada.

1.3. LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

Una de las respuestas necesarias del estado frente a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, puesto que prioritariamente debe promover los derechos y contar con políticas y servicios de prevención, es tipificar la conducta como infracción penal.

De las infracciones penales que contempla el Código Orgánico Integral Penal (COIP) este procedimiento de actuación unificada es específico para los delitos contra la integridad sexual y reproductiva que constan tipificados en la Sección Cuarta del Capítulo Segundo del Título IV del referido cuerpo legal, y que son los que constan en la tabla siguiente.

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL	
Art. 164 Inseminación no consentida	La persona que insemine artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su consentimiento, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, quien la ocasione será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
Art. 165 Privación forzada de capacidad de reproducción	La persona que sin justificación de tratamiento médico o clínico, sin consentimiento o viciando el consentimiento, libre e informado, prive definitivamente a otra de su capacidad de reproducción biológica, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
Art. 166 Acoso sexual	La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaleciendo de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre

	previsto en el inciso primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.
Art. 167 Estupro	La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho años , será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Art. 168 Distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes	La persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños o adolescentes , material pornográfico, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Art. 169 Corrupción de niñas, niños y adolescentes	La persona que incite, conduzca o permita la entrada de niñas, niños o adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se exhibe pornografía, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Art. 170 Abuso sexual	La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de diez a trece años.
Art. 171 Violación	Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 3. Cuando la víctima sea menor de catorce años . Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando: 1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño psicológico permanente. 2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad grave o mortal. 3. La víctima es menor de diez años. 4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 5 La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier motivo, siempre y cuando no constituya violación incestuosa.

	En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años
Art. 171.1 Violación incestuosa	Artículo 171.1.- Violación incestuosa. La persona que viole a un pariente que sea ascendiente, descendiente o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista en el artículo anterior. Si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
Art. 172 Utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual	La persona que utilice a niñas, niños o adolescentes , a personas mayores de sesenta y cinco años o personas con discapacidad para obligarlas a exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
Art. 103 Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes	La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual; será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. Si la víctima, además, sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia; ministro de culto, profesor, maestro, o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
Art. 173 Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos	La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de dieciocho años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de dieciocho años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años
Art. 174 Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos	La persona, que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de dieciocho años de edad , será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Autora: Adriana Monesterolo Lencioni, 2020. Fuente: COIP y Ley Orgánica Reformatoria a COIP publicada en el Registro Oficial Suplemento, N 107 de 24 de diciembre de 2019.

Gráfico 2: **Delitos contra la integridad sexual en el Ecuador**

En el imaginario social y en la práctica institucional existen algunas infracciones penales que tienen mayor visibilidad respecto de otras, las cuales incluso configuran tipos penales nuevos. Por ello, en el capítulo tercero con la finalidad de ofrecer orientaciones para la práctica de diligencias y medios de pruebas idóneos para los delitos, se organizan estos delitos en tres categorías, considerando si en su realización existen o no relaciones sexuales o se utilizan medios electrónicos.

1.4. ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

En este apartado se incluyen las reglas comunes del COIP para los delitos contra la integridad sexual, así como algunos aspectos relacionados con el ejercicio de la acción penal de interés para quienes aplicarán este Procedimiento Especial de Actuación Unificada por su incidencia en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

RESPECTO A LA VÍCTIMA

- El comportamiento público o privado de la víctima, anterior a la comisión de la infracción, no es considerado dentro del proceso (COIP, Art. 175.4).
- El consentimiento dado por la víctima menor de 18 años es irrelevante (COIP, Art. 175.5)
- Las víctimas pueden ingresar al Programa de protección a víctimas y testigos (COIP, Art. 175.6).

LA ACCIÓN PENAL ES DE CARÁCTER PÚBLICO, SALVO ESTUPRO

- En todos los delitos contra la integridad sexual contra niñas, niños y adolescente el ejercicio de la acción es público, salvo el estupro, cuyo ejercicio es privado.
- El ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, sin necesidad de denuncia previa. La fiscal o el fiscal deben llevar a cabo la investigación previa, y luego son parte procesal en el proceso penal ante la y el juez y tribunales (COIP art. 439.3).
- En todo caso, lo más importante es asegurar en el marco de los derechos de las víctimas y del debido proceso el establecimiento de la verdad, la sanción penal y la reparación integral.
- El delito de **ESTUPRO**, cuyo ejercicio de la acción es privado, requiere de querrela (COIP Art. 410, 415.3). En este delito, el legislador otorga un especial poder de disposición la víctima al establecer que la acción corresponde únicamente a la víctima (COIP, Art. 410)

y en donde se cuenta con un procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal (COIP Art. 644, 647).

INVESTIGACIÓN FISCAL PREVIA

- En virtud del ejercicio público de la acción penal, la fiscalía puede investigar, “sin necesidad de denuncia previa” (COIP, art. 410).
- Las diligencias que se realizan para la investigación de la infracción penal se deben mantenerse en reserva (COIP, art. 584).

DELITOS NO SON SUCEPTIBLES DE MEDIACIÓN O CONCILIACIÓN

- Si bien el artículo 190 de la Constitución de la República “reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos”, ningún procedimiento como la mediación o conciliación proceden en los delitos contra la integridad sexual por expresa disposición de la ley.
- No se puede transigir, es decir que en ningún caso puede quedar sometida la decisión respecto a la responsabilidad y la pena al acuerdo entre el agresor y la víctima, por su naturaleza y por encontrarse exceptuados de ser tramitados en procedimiento abreviado, por mandato de la Ley Orgánica Reformatoria de COIP, Art. 98 que sustituye el numeral 1 del Art. 635 COIP, y del procedimiento directo cuando se trata de delitos flagrantes (Ley Reformatoria de COIP, Art. 99 que sustituye el Art. 640 COIP).

DEBER JURÍDICO DE DENUNCIAR

- Quien pone en conocimiento de la autoridad competente NO es sujeto procesal penal.
- Existe la obligación jurídica de denunciar por mandato expreso de la ley (COIP art.422)
 - Las o los profesionales de la salud de establecimiento públicos o privados que conozcan de la comisión de un presunto delito.
 - La o los directores, educadores u otras personas responsables de las instituciones educativas, por presuntos delitos cometidos en dichos centros.
 - “Toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas” (CNA art. 17).
- Omisión de denuncia por parte de persona que, en razón de profesión, cargo u oficio, en los ámbitos de salud, recreación, religioso, deportivo o cultural, que conozca de hechos que constituyan delitos contra la integridad sexual y no lo denuncie puede ser sancionada con **pena** privativa de la libertad de 2 a 6 meses.

- Si omisión es por parte de propietario, responsable o representante legal de la institución pública o particular se aplicará máximo de la pena.
- Se aumenta la pena en un tercio del máximo cuando la omisión se produce sobre delitos contra la integridad física, psicológica o sexual de niños, niñas y adolescentes².
- No se podrá alegar secreto profesional u objeción de conciencia, para omitir deber de denuncia.

1.5. LAS VÍCTIMAS Y SUS DERECHOS ESPECÍFICOS

Las niñas, niños y adolescentes pueden ser consideradas víctimas, de conformidad con el artículo 441 del COIP:

- individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción.
- han sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción penal.
- Son descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de quienes han sufrido agresión o cualquier tipo de daño o perjuicio por el cometimiento de una infracción penal.
- compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
- La condición de víctima es independiente a que se identifique, aprehenda, enjuicie, sancione o condone al responsable de la infracción o a que exista un vínculo familiar con este.

La Constitución del Ecuador reconoce que las víctimas de infracciones penales gozarán de **protección especial**, se les garantizará su **no revictimización**, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. (CRE, art 78).

El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 11 reconoce a las víctimas en todo proceso penal, los siguientes derechos:

1. Proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a dejar de hacerlo en cualquier momento, de conformidad con las normas de este Código. **En ningún caso se obligará a la víctima a comparecer.**
2. A la adopción de **mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos** que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del

² Ley Orgánica Reformativa del Código Orgánico Integral Penal, art. 65 que sustituye el texto del Artículo 276 COIP.

derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada caso.

3. A la reparación por las infracciones que se cometan por agentes del Estado o por quienes, sin serlo, cuenten con su autorización.
4. A la **protección especial**, resguardando su **intimidad y seguridad**, así como la de sus familiares y sus testigos.
5. A **no ser revictimizada**, particularmente en la **obtención y valoración de las pruebas, incluida su versión**. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos.
6. A ser asistida por un **defensor público** o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral.
7. A ser asistida gratuitamente por una o **un traductor o intérprete**, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, así como a recibir asistencia especializada.
8. A **ingresar al Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas**, testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo con las disposiciones de este Código y la ley.
9. A recibir **asistencia integral de profesionales adecuados** de acuerdo con sus necesidades durante el proceso penal.
10. A **ser informada** por la o el fiscal de la investigación preprocesal y de la instrucción.
11. A **ser informada**, aun cuando no haya intervenido en el proceso, del resultado final, en su domicilio si se lo conoce.
12. A ser tratada en **condiciones de igualdad** y cuando amerite, aplicar **medidas de acción afirmativa** que garanticen una investigación, proceso y reparación, en relación con su dignidad humana.

Si la víctima es de **nacionalidad distinta a la ecuatoriana**, se permitirá su **estadía temporal o permanente dentro del territorio nacional**, por razones humanitarias y personales, de acuerdo con las condiciones del Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal.

CAPÍTULO SEGUNDO

LA PROTECCIÓN INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

El reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos conlleva el escuchar y tomar en cuenta su opinión en todas las decisiones que les afecten, el recibir un trato digno que se corresponde con la dignidad y la titularidad de sus derechos, el reconocer su individualidad y acompañarle en su proceso de desarrollo integral.

En la Convención sobre los Derechos del Niño el desarrollo es una finalidad que se logra al garantizar la totalidad de los derechos³ y comprende los aspectos “físico, mental, espiritual, moral y social”⁴.

La Constitución reconoce a las niñas, niños y adolescentes:

- Sujetos plenos de **derechos comunes** a todos los seres humanos (CRE, art 45)
- Sujetos plenos de **derechos específicos** por su edad (CRE, art 45)
- Sujetos de **atención prioritaria**, por su condición de niñas, niños y adolescentes como por ser víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil. (CRE, art. 35)
- Sujetos de **protección y atención** contra todo tipo de violencia (CRE, art. 46.4) por la cual el estado debe adoptar “las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes” (CRE Art.46, 66.3)

Es primordial que las niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos, y que en sus relaciones tengan la posibilidad de desarrollar habilidades y competencias para empoderarse y exigir su ejercicio; así como, en el evento de que sean vulnerados tengan acceso efectivo a los mecanismos y medidas para la atención integral, la protección y la restitución de los derechos hasta la reparación integral luego del procedimiento penal correspondiente.

La protección integral en la Convención de los Derechos del Niño se refiere a la “protección de los derechos”⁵ lo cual como lo dispone la primera norma del Código de la Niñez y Adolescencia, exige no sólo su reconocimiento sino un conjunto de medios para hacerlos “efectivos, garantizarlos y protegerlos”⁶, todo lo cual será posible con la implementación y funcionamiento

³ Simon F. (2009), Derecho de la Niñez y Adolescencia De la Convención sobre los Derechos del Niño a las Legislaciones Integrales, Tomo I, Quito, Ecuador, Cevallos, pág 256.

⁴ Convención sobre los Derechos del Niño, art. 27.1.

⁵ Mary Beloff citada por Simon, op. cit. pág. 256.

⁶ Código de la Niñez y Adolescencia, art. 1.

del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral, reconocido por la Constitución del Ecuador.

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la **protección integral** que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su **desarrollo integral** y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la **doctrina de protección integral**.

Todos los derechos de la niñez y adolescencia deben ser respetados y garantizados a la luz de la **Doctrina de la Protección integral** reconocida expresamente en la Constitución del Ecuador al recoger los principios fundamentales como son los del interés superior del niño y la prioridad absoluta de sus derechos (CRE 44); con el establecimiento de la Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia que por mandato constitucional deben aplicar sus principios (CRE, art.175); y finalmente porque la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales están incorporados al ordenamiento jurídico y conforman el bloque de constitucionalidad .

En base a la Convención sobre los Derechos del Niño y con la finalidad de garantizar el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos⁷ desarrollan orientaciones específica relativas a:

- un trato digno y comprensivo
- la protección contra la discriminación
- ser informado
- la intimidad
- una asistencia eficaz
- ser oído y a expresar opiniones y preocupaciones
- ser protegido de sufrimientos durante el proceso de justicia
- la seguridad
- la reparación
- medidas preventivas especiales

El **derecho** de la niña, niño o adolescente a un **trato digno y comprensivo** incluye:

- ser tratados con tacto y sensibilidad a lo largo de todo el proceso de justicia, tomando en consideración su situación personal y sus necesidades inmediatas, su edad, sexo, impedimentos físicos y nivel de madurez y respetando plenamente su integridad física, mental y moral.

⁷ Consejo Económico Social, Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, 2005.

- ser tratado como una persona con sus propias necesidades, deseos y sentimientos personales.
- La injerencia en la vida privada del niño deberá limitarse al mínimo necesario, manteniéndose al mismo tiempo normas exigentes en la reunión de pruebas a fin de garantizar un resultado justo y equitativo del proceso de justicia.
- Con el fin de evitar al niño mayores sufrimientos, las entrevistas, exámenes y demás tipos de investigación deberán ser realizados por profesionales capacitados que actúen con tacto, respeto y rigor.

En el capítulo tercero de este Procedimiento, se desarrollan los principios de las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos y las pautas de actuación que enfatizan en el trato digno y comprensivo, a ser oídos y a expresar opiniones y preocupaciones (CDN art. 12, CNA art. 60) y a la atención y adopción de medidas de protección.

2.1. COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES

Las competencias y atribuciones son un eje de la actuación estatal encaminada a dar cumplimiento con los derechos de la niñez y adolescencia y por tanto, también los son del procedimiento especializado de actuación única.

Las competencias y atribuciones de los actores institucionales están establecidas en la Constitución y la ley, y responden al deber del estado, en su conjunto y organización, de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes⁸. Estas confieren el marco de actuación de las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en la detección, derivación y atención de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, a la vez que son referentes para establecer los diferentes tipos de responsabilidad por el incumplimiento de las mismas.

En este apartado se desarrollan las competencias y atribuciones específicas de las instancias y organismos que integran las funciones ejecutiva y judicial con relevancia en la materia y alcance de este Procedimiento y de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, las cuales en el cumplimiento de sus atribuciones específicas constituyen sustento de la actuación institucional en los momentos de la detección, derivación y atención a niñas, niños y adolescencias víctimas de violencia sexual.

⁸ CRE Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales...

2.1.1. FUNCIÓN EJECUTIVA

Integrada por Presidencia y Vicepresidencia de la República; Ministerios de Estado; demás organismos e instituciones necesarios. (CRE, art. 141).

La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública. (CRE, art. 141) y tiene el deber primordial de “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales⁹ el cual se concreta en las **políticas y servicios públicos**¹⁰ que integran el sistema de GARANTÍAS CONSTITUCIONALES (en el mismo nivel que las normativas jurisdiccionales y normativas).

Para el cumplimiento de sus funciones tiene las siguientes atribuciones respecto a las políticas y servicios públicos; y responde ante la ciudadanía y la comunidad internacional por el avance en el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales:

- Atribuciones de **rectoría, planificación, ejecución y evaluación** de las políticas públicas nacionales y **planes que se creen para ejecutarlas**. (CRE, art. 141)
- **Art. 147.-** Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley: [...]

3. Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva.

5. Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control.

Las ministras y los ministros de Estado [...] “Serán responsables **política, civil y penalmente** por los **actos y contratos** que realicen en el ejercicio de sus funciones, con independencia de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado” (CRE, art. 151)

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Su función se enmarca en los objetivos del Sistema de Inclusión Económica y Social y en el del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia.

“El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo” (CRE, art. 340).

“El Estado generará las condiciones para la **protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas**, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará

⁹ CRE, Art. 3.1.

¹⁰ CRE, TÍTULO III Garantías Constitucionales, Capítulo segundo Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana, Art. 85.

su acción hacia aquellos grupos que requieran **consideración especial** por la **persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia**, o en virtud de su **condición etaria**, de salud o de discapacidad. **La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley.** Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. **El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia** será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias” (CRE, art. 341).

Tiene las siguientes competencias y atribuciones legales:

- Por mandato legal es el **rector de la política pública de protección social integral**¹¹
- Tiene entre sus funciones: “Definir y evaluar el cumplimiento de la **Política Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia**, asegurar la correspondencia de las políticas sectoriales y seccionales con la política nacional de protección integral y exigir de los organismos responsables su cumplimiento (CNA, art. 195 a));
- Registro de las entidades de atención y de programas de atención (CNA, art. 212); control, fiscalización y evaluación de las mismas (CNA, art. 213).

Mediante Decretos Ejecutivos¹², la Presidencia le ha encargado además:

- a) “**Promover y fomentar activamente la inclusión económica y social** de la población, de tal forma que se asegure el logro de una adecuada calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas, mediante la eliminación de aquellas condiciones, mecanismos o procesos que restringen la libertad de participar en la vida económica, social y política y que permiten, facilitan o promueven que ciertos individuos o grupos de la sociedad sean despojados de la titularidad de sus derechos económicos y sociales, y apartados, rechazados o excluidos de las posibilidades de acceder y disfrutar de los beneficios y oportunidades que brinda el sistema de la **instituciones económicas y sociales.**
- b) Promover la **atención integral** de la población a lo largo de su ciclo de vida (**niñez, adolescencia**, juventud, adultos mayores), priorizando sus acciones en aquellos individuos o grupos que viven en situación de exclusión, discriminación, pobreza o **vulnerabilidad**; y,
- c) Las demás funciones, atribuciones, competencias y responsabilidades que le correspondían al Ministerio de Bienestar Social”¹³.
- d) Administrar y transferir subsidios monetarios mensuales condicionados a personas y hogares en situación de pobreza y extrema pobreza determinados según el Registro Social.

¹¹ Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, Disposición Reformatoria Primera que sustituye en los artículos 47, letra b; 9, 15, 43 agregados luego del artículo 125; 170 inciso final, 183, 188, 195, 300 y 388 del Código de la Niñez y Adolescencia la frase “Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia” por “Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social”, **en su calidad de rector de la política pública de protección social integral**

¹² Decreto Ejecutivo 580 de 23 de agosto de 2007 y Decreto Ejecutivo 1356 de 12 de noviembre de 2012.

¹³ Decreto Ejecutivo 580 de 23 de agosto de 2007.

- e) Administrar y transferir pensiones asistenciales para personas de la tercera edad o con discapacidad superior al 40% determinada por la autoridad sanitaria nacional, según el índice de pobreza determinado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en base al Registro Social.
- f) Promover líneas de financiamiento para establecer mecanismos y estímulos de apoyo a programas de carácter productivo orientados a contribuir a la estrategia de superación de la pobreza de personas y hogares destinatarios del bono de desarrollo humano y pensiones asistenciales;¹⁴

Ministerio de Educación

Las funciones del Ministerio de Educación se comprenden en el marco de la finalidad del sistema nacional de educación y las obligaciones del estado establecidas en la Constitución.

Por mandato del artículo 346 de la Constitución el Sistema Nacional de Educación “tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como **centro al sujeto que aprende**, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente [...]”.

En el marco específico del presente Procedimiento Especial, será responsabilidad del Estado de conformidad con el artículo 347 de la Constitución:

- 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales.
 - 4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.
 - 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.
 - 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.
 - 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos.
- “El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. **El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema**”. (CRE, art.344; LOEI art. 21 y 22).

¹⁴ El Decreto Ejecutivo 1356 de 12 de noviembre de 2012 en cuyo Artículo 1 se dispone que se integra al Ministerio de Inclusión Económica y Social el Instituto de la Niñez y la Familia - INFA y el Programa de Protección Social (PPS), y en su Artículo 2 reforma el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 580, publicado en el Registro Oficial No. 158 del 29 de agosto del 2007, agregando los literales d) a f) citados.

Entre las competencias, atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional –entiéndase Ministerio de Educación–, de la LOEI, art. 22 y relacionadas con la materia de este Procedimiento, constan las siguientes:

- b. Administrar el Sistema Nacional de Educación y asumir la responsabilidad de la educación, con sujeción a las normas legales vigentes;
- c. Formular e implementar las políticas educativas [...]
- n. Autorizar la creación o disponer la revocatoria de las autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos educativos, de conformidad con la presente Ley y su reglamento; [...]
- o. Ejercer las labores de fiscalización de establecimientos educativos de conformidad a la presente Ley;
- p. Ejercer las facultades sancionadoras de conformidad con la Constitución de la República y la Ley; [...]
- t. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y demás normativa que rige el Sistema Nacional de Educación;
- u. Expedir, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley, acuerdos y resoluciones que regulen y reglamenten el funcionamiento del Sistema Nacional de Educación;
- v. Resolver, dentro del ámbito de sus funciones y de conformidad con la Constitución de la República y la Ley, los asuntos no contemplados en la presente Ley y su reglamento; [...]

La Ley Orgánica de Educación Intercultural¹⁵ en el Título III del Sistema Nacional de Educación, Capítulo Octavo relativo a las Instancias de Resolución de Conflictos del Sistema Nacional de Educativo, establece las Juntas Distritales de solución de conflictos y las define como “el ente encargado de la solución de conflictos del sistema educativo” con competencias para conocer, “de oficio, a petición de parte o por informe de autoridad competente, los reclamos, quejas, peticiones o solicitudes que, de conformidad con la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos, le correspondan conocer. Serán competentes, además, para conocer y resolver aquellos casos que constituyan atentados al pleno goce del derecho a la educación que se suscitaren en las instituciones educativas públicas, municipales, particulares o fiscomisionales sin eximir las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

Las infracciones penales no son susceptibles de resolución por medio de la mediación o conciliación¹⁶. El artículo 63 de la LOEI expresamente excluye la posibilidad de las Juntas Distritales de conocer de conflictos que puedan constituir delitos “por incumplimiento de la presente Ley y en el ejercicio de sus funciones, enfrenten los profesionales de la educación del Sistema Nacional de Educación”. La potestad sancionadora que la ley otorga a **Juntas Distritales de Resolución de Conflictos** se refiere a la responsabilidad administrativa y la correspondiente sanción por las faltas que se pudieren cometer (LOEI art. 64, 65).

¹⁵ Corte Constitucional del Ecuador, Registro Oficial N. 417 - Segundo Suplemento de 31 de marzo del 2011, art. 65.

¹⁶ Se ha informado que algunas Juntas Distritales en ocasiones han conocido de situaciones de violencia sexual en base al Reglamento que contiene algunas normas que no se corresponden con el carácter administrativo de este órgano.

En caso de que la Junta Distrital detectare o llegare a conocer de oficio y por terceros alguna situación de sospecha de violencia sexual, deberá realizar la referencia, como consta en este Procedimiento Especial Único de Actuación.

Ministerio de Salud

Ejercer la rectoría del sistema nacional de salud y es el responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector (CRE At. 361). Será responsable de acuerdo con lo previsto en el Artículo 363 de la Constitución de:

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.
2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la cobertura.
3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de salud.
4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos.
5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución.
6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto.
7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.
8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.

Ministerio de Gobierno

El Decreto Ejecutivo 718 publicado en el Registro Oficial N° 483 Suplemento de 8 de mayo de 2019, dispone la transformación del Ministerio del Interior en “Ministerio de Gobierno”, como entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera, y el titular del Ministerio del Interior pasará a ser titular del Ministerio de Gobierno, en el marco de un proceso de transformación institucional.

El Ministerio de Gobierno tiene competencias en la gestión política para gobernabilidad y prevención del conflicto; la articulación intra gubernamental; articulación intergubernamental; y, articulación entre Funciones del Estado, para lo cual, además de sus atribuciones que le correspondía antes de la fecha de expedición del Derecho Ejecutivo 718, ejercerá las siguientes:

1. Formular las políticas y estrategias de gobernabilidad para la Función Ejecutiva y dirigir su implementación;
2. Asesorar a las entidades de la Función Ejecutiva en la gestión política para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, los programas y agendas del Gobierno;

3. Monitorear y evaluar la ejecución de la agenda política y de las políticas y estrategias de gobernabilidad de las entidades de la Función Ejecutiva;
4. Diseñar e implementar protocolos de articulación política entre la Función Ejecutiva y las demás Funciones del Estado;
5. Revisar propuestas de leyes u otras normativas de carácter prioritario de iniciativa del Ejecutivo, para identificar alertas e impactos de naturaleza social o política, bajo el enfoque de la gobernabilidad, así como coordinar con los órganos rectores sectoriales de la Función Ejecutiva, de ser necesario;
6. Coordinar la implementación de las políticas y estrategias de gobernabilidad a través de las Gobernaciones, con los representantes del Ejecutivo en territorio;
7. Diseñar e implementar, en coordinación con los actores territoriales, políticas y acciones de prevención de conflictos sociales en territorio;
8. Diseñar e implementar mecanismos de monitoreo y evaluación de impactos sociales y políticos generados por la gestión de las entidades de la Función Ejecutiva en los territorios;
9. Diseñar e implementar un modelo de gestión política territorial que garantice la gobernabilidad democrática en el territorio nacional;
10. Promover, articular y coordinar la conformación de espacios de diálogo y relaciones políticas entre la Función Ejecutiva, los gobiernos autónomos descentralizados, otros actores sociales y la ciudadanía en el territorio; y,
11. Las demás que le señale el Presidente de la República.

Policía Nacional

Tiene la “misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional” (CRE Art. 163).

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, **investigación especializada**, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza. Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados. (CRE Art. 163).

La Policía Nacional tiene como deber inmediato, auxiliar y ayudar a las juezas y jueces, y ejecutar pronto y eficazmente sus decisiones o resoluciones cuando así se lo requiera.

El Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público¹⁷, desarrolla las funciones de la Policía Nacional, entre las que constan las siguientes:

- Servir a la comunidad y proteger a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión (Art. 61.2)
- **Desarrollar acciones operativas para la protección de derechos**; mantenimiento, control y restablecimiento de la paz social y orden público; **prevención** de las infracciones y seguridad ciudadana [...]; (Art.61.3)

¹⁷ Corte Constitucional del Ecuador, Registro Oficial Suplemento No. 19 de 21 de junio 2017.

- Cumplir con el control operativo en los ámbitos requeridos de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, en coordinación con las entidades competentes de los distintos niveles de gobierno, [...] (Art. 61.6);
- **Coordinar su actuación y cumplir las disposiciones de los órganos de la Función Judicial** en el ámbito de sus competencias; (art. 61.7)
- **Vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar, indicios o vestigios relacionados con el cometimiento de una infracción**, en cumplimiento de las disposiciones de la ley, reglamentos y procedimientos establecidos por el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses (art.61.8);
- **Prestar a las autoridades públicas el auxilio de la fuerza que estas soliciten**, en el ejercicio de sus atribuciones legales (art. 61.9) [...];
- **Prevenir e investigar la delincuencia común y organizada, nacional y transnacional** (art. 61.11);
- Garantizar la **cadena de custodia, vestigios y los elementos materiales** de la infracción en la **escena del delito** (art. 61.12)
- **Privilegiar la protección de los derechos** de las personas en especial de los grupos de **a tención prioritaria** contempladas en la Constitución de la República (art. 61,13);
- Las demás funciones asignadas en la Constitución de la República, leyes y el Reglament o de este Código (art. 61.15.).

En este sentido, el Código Orgánico de la Función Judicial establece el deber de la Policía Nacional de auxiliar y ayudar a las juezas y jueces, y ejecutar pronto y eficazmente sus decisiones o resoluciones cuando así se lo requiera (COFJ, art. 30); y la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, en el Art. 651.2.5 dispone como obligaciones de los agentes de Policía Nacional:

- Ejecutar medidas de protección
 - Dispensar auxilio
 - Proteger y transportar a las víctimas protegiendo su integridad y evitando su revictimización.
- En cumplimiento de la especificidad que requiere la protección integral a la niñez y adolescencia el Código de la Niñez y Adolescencia reconoce a la **Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes**:

- La Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes interviene en el Sistema exclusivamente para el cumplimiento de las tareas asignadas por la ley a los cuerpos policiales, que desarrollará en coordinación con los demás organismos del Sistema y cuerpos policiales (CNA art. 208).
- La Investigación orientada a: 1. Ubicar a los niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar, presuntamente perdidos, desaparecidos o plagiados; y, 2. ubicar los lugares de residencia del padre, la madre o parientes dentro del tercer grado de consanguinidad ausentes o desaparecidos del niño, niña o adolescente (CNA art. 268).

Las actividades de la Policía Nacional relacionadas con la investigación preprocesal y procesal penal, por mandato legal¹⁸ estarán bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado, en el marco del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Secretaría de Derechos Humanos

Mediante Decreto Ejecutivo 560 publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 387 de 13 de diciembre de 2018 se dispone la transformación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría de Derechos Humanos, como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera.

La Secretaría de Derechos Humanos tiene competencias relacionadas con las obligaciones de carácter internacional en materia de Derechos Humanos, con atribuciones en la coordinación de la ejecución de sentencias y demás decisiones originadas en los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema Universal; así como en la erradicación de la violencia contra mujeres, niñas niños y adolescentes y el acceso efectivo a una justicia de calidad y oportuna.

En virtud de lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo 560 y el 718 la Secretaria de Derechos Humanos asume competencias “de plurinacionalidad e interculturalidad, participación ciudadana y movimientos, organizaciones y actores sociales, para lo cual ejercerá, además de sus atribuciones actuales”, las siguientes:

1. Apoyar y asesorar a los órganos rectores sectoriales de la Función Ejecutiva en la construcción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que propendan a posicionar a los pueblos, nacionalidades y culturas del Ecuador, en pos de la construcción del Estado plurinacional e intercultural;
2. Apoyar y asesorar a los órganos competentes en el seguimiento y evaluación de políticas públicas, que garanticen los derechos colectivos contemplados en la Constitución de la República;

¹⁸ Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, art. 70.

3. Coordinar, junto con los órganos rectores sectoriales de la Función Ejecutiva, la conformación y acompañamiento a las veedurías ciudadanas, en el marco de la normativa vigente, para propiciar una cultura de servicio público, ético, comprometido y transparente a la comunidad; y,
4. Coordinar junto con los órganos rectores sectoriales de la Función Ejecutiva la formulación e implementación de políticas, estrategias y mecanismos de participación ciudadana y liderazgo ciudadano con un enfoque de derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente”.

La Subsecretaría de Género y Servicios Integrales de la Secretaría de Derechos Humanos cuya función se sustenta en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres cuenta con la Dirección de Atención, Protección Especial y Reparación a Víctimas de Violencia, Explotación, Trata, Tráfico y otros Grupos de Atención Prioritaria¹⁹.

Servicio de Protección Integral²⁰

Es un servicio público gratuito de la Secretaría de Derechos Humanos, que brinda atención psicológica, legal y de trabajo social a víctimas de violencia, de trata de personas, casos remitidos desde fiscalías y unidades judiciales especializadas, juntas de protección y otras instituciones.

El Servicio de Protección Integral (SPI) ofrece atención especializada e integral en psicología y trabajo social a víctimas de violencia, para restituir los derechos vulnerados o amenazados. En el país existen 46 oficinas del Servicio de Protección Integral, distribuidas en diferentes ciudades.

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional

Los consejos nacionales para la igualdad son parte de la función ejecutiva y tienen la responsabilidad constitucional “de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Ejercen atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley” (Art. 156 CRE) y la Ley²¹ estableció que uno de los Consejos Nacionales para la Igualdad es el Intergeneracional .

¹⁹ <https://www.derechoshumanos.gob.ec/subsecretaria-prevencion-y-erradicacion-de-la-violencia-contra-mujeres-ninas-ninos-y-adolescentes/>

²⁰ <https://www.derechoshumanos.gob.ec/servicio-de-proteccion-integral/>

²¹ Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad, art.6.

2.1.2. FUNCIÓN JUDICIAL

La Función Judicial por mandato constitucional (CRE.art.177) se compone de órganos jurisdiccionales que son los encargados de administrar justicia (Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales, Tribunales y juzgados), órganos administrativos (Consejo de la Judicatura), órganos auxiliares y órganos autónomos (Defensoría Pública y Fiscalía General del Estado).

Po sus competencias y atribuciones en los momentos de la detección, derivación y atención de este Procedimiento, se desarrollará lo pertinente a la Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y al Consejo de la Judicatura.

Fiscalía General del Estado

La **Fiscalía** es un organismo autónomo de la Función Judicial y le corresponde de conformidad con la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y el COIP:

- Dirigir, **de oficio o a petición de parte**, la investigación preprocesal y procesal penal;
- durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas.
- De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal (CRE, art 195; COFJ, art. 282.1)
- Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial en las indagaciones previas en las etapas del proceso penal (COFJ art. 282.2;
- Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados, en las indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos de acción pública, quienes deberán ser citados y notificados para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo, cualquier actuación que viole esta disposición carecerá de eficacia probatoria;
- Garantizar la intervención de **fiscales especializados en delitos contra la integridad sexual y reproductiva**, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, crímenes de odio y **los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes**, jóvenes, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores y, en las materias pertinentes que, por sus particularidades, requieren una mayor protección (COIP, art.443.4).
- Dirigir los sistemas de investigación de medicina legal y ciencias forenses; y de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal.

Sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses

Corresponde a la Fiscalía organizar y dirigir el Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses (COIP, art. 443.1); y dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que contará con la ayuda de organismos gubernamentales y no gubernamentales con el fin de establecer, de manera técnica y científica, procedimientos estandarizados para la práctica de la pericia médico legal (COFJ, art 282.5)

El Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 19 de 21 de junio 2017, regula el Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses que prestará servicios especializados de apoyo técnico y científico a la administración de justicia, en materia pre procesal y procesal penal.

De conformidad con el artículo 449 del COIP, son atribuciones del personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses:

1. **Dar aviso** a la o al fiscal en forma inmediata, de cualquier **noticia que tenga sobre el cometimiento de un delito** de ejercicio público de la acción penal.
2. **Recibir denuncias** en delitos de ejercicio público de la acción penal y remitirlas de forma inmediata a la Fiscalía para su tramitación.
3. Realizar las **primeras diligencias investigativas**, tales como: entrevistas, vigilancias, manejo de fuentes y otros, las que serán registradas mediante grabación magnetofónica o de video.
4. **Aprender a las personas sorprendidas en delito flagrante**, a quienes les comunicará sus derechos, elaborará el parte correspondiente y la persona aprehendida, quedará inmediatamente, a órdenes del órgano judicial competente.
5. **Tomar las medidas adecuadas y oportunas para impedir el cometimiento o consumación** de una infracción que llegue a su conocimiento.
6. **Vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar** donde presuntamente se comete la infracción y **recoger los resultados, huellas, señales, armas, objetos, instrumentos y demás vestigios**.
7. Proceder al levantamiento e identificación del cadáver.
8. Cumplir de acuerdo con los plazos señalados, las disposiciones para la práctica de diligencias investigativas de la o el fiscal.
9. Cumplir las órdenes que les imparta la o el fiscal o la o el juzgador.
10. Identificar a los sospechosos.
11. Mantener actualizadas las bases de datos de información y llevar un sistema estadístico de investigación del delito.

12. Solicitar a la o al fiscal la autorización judicial para la práctica de diligencias investigativas. Sobre las diligencias investigativas y sus resultados, se presentará un informe a la o al fiscal, dentro de los plazos señalados. En aquellos lugares **donde no exista personal del Sistema** especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, en el ámbito de la justicia penal, **los servidores o servidoras de la Policía Nacional tendrán las atribuciones señaladas en este artículo.**

Sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en la investigación pre procesal o en cualquier etapa del proceso penal

Corresponde a la Fiscalía dirigir el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal (CRE Art 198; COFJ art. 282.9; COIP art. 443.2)

Establecido para dar cumplimiento al derecho de las víctimas previsto en el artículo 11.8 del COIP y por el cual se puede en el cual se “podrán acogerse a las medidas especializadas de protección y asistencia para precautelar su integridad y no revictimización, cuando se encuentren en peligro” (COIP 445).

Se establece el deber legal de coordinación para cumplir “los principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia, todas las entidades públicas y privadas afines a los intereses y objetivos del Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso” COIP art. 446).

La fiscal o el fiscal tiene las siguientes atribuciones legales²²:

1. Recibir denuncias escritas o verbales en los delitos en los que procede el ejercicio público de la acción.
2. Reconocer los lugares, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos con la intervención del personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses o personal competente en materia de tránsito, conforme con lo dispuesto en este Código.
3. Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o abstenerse del ejercicio público de la acción.
4. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses o al personal competente en materia de tránsito, la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, salvo la recepción de la versión del sospechoso.
5. Supervisar las disposiciones impartidas al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses o a la autoridad competente en materia de tránsito.

²² Código Orgánico Integral Penal, art.444.

6. Recibir las versiones de la víctima y de las personas que presenciaron los hechos o de aquellas a quienes les conste algún dato sobre el hecho o sus autores.
7. Solicitar a la o al juzgador, en los casos y con las solemnidades y formalidades previstas en este Código, la recepción de los testimonios anticipados aplicando los principios de inmediación y contradicción, así como de las víctimas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
8. Impedir, por un tiempo no mayor de ocho horas, que las personas cuya información sea necesaria, se ausenten del lugar, en la forma establecida en este Código.
9. Disponer que la persona aprehendida en delito flagrante sea puesta a órdenes del órgano judicial correspondiente, a fin de que resuelva su situación jurídica dentro de las veinticuatro horas desde que ocurrió la aprehensión.
10. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses o autoridad competente en materia de tránsito, la identificación del sospechoso o de la persona procesada cuando la víctima o los declarantes no conozcan su nombre y apellido, pero aseguren que la identificarían si vuelven a verla, de acuerdo con las disposiciones previstas en este Código.
11. Solicitar a la o al juzgador que dicte las medidas cautelares y de protección que considere oportunas para la defensa de las víctimas y el restablecimiento del derecho. Igualmente podrá pedir la revocatoria o cesación de dichas medidas cuando estime que la investigación practicada ha permitido desvanecer los indicios que las motivaron.
12. Ordenar el peritaje integral de todos los indicios que hayan sido levantados en la escena del hecho, garantizando la preservación y correcto manejo de las evidencias.
13. Aplicar el principio de oportunidad.
14. Disponer la práctica de las demás diligencias investigativas que considere necesarias. Siempre que se limiten los derechos de alguna persona se requerirá autorización de la o el juzgador. La o el denunciante o cualquier persona que, a criterio de la o el fiscal, deba cooperar para el esclarecimiento de la verdad, tendrá que comparecer ante la Fiscalía para la práctica del acto procesal respectivo. En caso de incumplimiento la o el fiscal podrá solicitar la comparecencia con el uso de la fuerza pública.

Defensoría Pública

La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos (CRE Art. 191).

Por mandato constitucional la Defensoría Pública prestará un servicio legal en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias. Le corresponde “Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas” (COFJ, 286.6) y brindar la prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial, a las personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación económica o social para garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente (CRE, Art. 191 y COFJ Art. 286).

El Código Orgánico Integral Penal enfatiza en la responsabilidad que tiene la Defensoría Pública de “garantizará el pleno e igual acceso a la justicia de las personas, que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de una defensa legal privada, para la protección de sus derechos”. (COIP, Art. 451).

La o el Defensor Público garantiza el derecho a la defensa y estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público. El COIP establece que en los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado (Art. 452). La o el defensor público²³:

- Brindará “la prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de abogada o abogado, a petición de parte interesada o por designación del tribunal, jueza o juez competente”
- no podrá excusarse de defender a la persona, salvo en los casos previstos en las normas legales pertinentes;
- brindará orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las personas cuyos casos se les haya asignado, intervengan en las diligencias administrativas o judiciales y velen por el respeto a los derechos de las personas a las que patrocinen. En todo caso primará la orientación a los intereses de la persona defendida;
- prestará asistencia legal de la persona desde la fase de investigación previa hasta la finalización del proceso, siempre que no cuente con una o un defensor privado (COIP, Art. 451)
- Instruirá a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su derecho a elegir una defensa privada
- Garantizará la libertad de escoger la defensa de la persona interesada y solicitar, de ser necesario, una nueva designación a la Defensoría Pública.

²³ Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 286 y Código Orgánico Integral Penal, Art. 451.

Consejo de la judicatura

El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial; es un órgano instrumental para asegurar el correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares (CRE art. 181 y COFJ art. 254).

La ley dispone que “en ningún caso, el Consejo de la Judicatura se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de las juezas y jueces, de las y los fiscales y de las defensoras y defensores públicos” (COFJ Art. 254).

Tiene las siguientes funciones constitucionales²⁴:

1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.
2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos.
3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas.
4. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial.
5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.

Le corresponde establecer cantonalmente el número de juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y determinar la circunscripción territorial en la que tengan competencia²⁵.

Las Unidades Judiciales de violencia contra las mujeres y miembros del núcleo familiar tienen la competencia para conocer los delitos sexuales contra mujeres y miembros del núcleo familiar, y las oficinas técnicas de las Unidades de violencia realizan valoraciones y pericias psicológicas, médicas y de trabajo social. La reforma al COIP faculta al Consejo de la Judicatura para disponer la creación de oficinas técnicas con profesionales en medicina, psicología y trabajo social, para garantizar la intervención para la atención integral de las víctimas²⁶.

La Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres²⁷, le confiere las atribuciones específicas para **requerir** a la Fiscalía, Defensoría Pública y Policía Nacional **información estadística** sobre todos los casos de violencia; y la garantía de acceso a la justicia

²⁴ Constitución de la República del Ecuador, art. 181.

²⁵ Código Orgánico de la Función Judicial, art. 232. Competencia de las juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar. (Sustituido por el num. 23 de la Disposición Reformatoria Segunda del Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180-S, 10-II-2014; y, por la Disposición Reformatoria Octava de la Ley s/n, 175-S, 05-II-2018).

²⁶ Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, art. 651.1 num.3.

²⁷ Ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, art. 34

en la lengua propia de cada etnia en la atención integral, reparación y restitución de /os derechos vulnerados de las víctimas de violencia contra las mujeres, a través de traductores; y del medio de comunicación que se requiera en caso de las personas con discapacidad.

2.1.3. JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Las Juntas Cantonales de protección de Derechos es un órgano de nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, de PROTECCION, DEFENSA Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS de las niñas, niños y adolescentes establecidas en el Código de la Niñez y “que tienen como función pública la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en el respectivo cantón (CNA art. 205)”.

De conformidad con el Artículo 206 del Código de la Niñez y Adolescencia, son atribuciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos relacionadas con este procedimiento:

- a) **Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos individuales** de niños, niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y **disponer las medidas administrativas de protección** que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado;
- b) **Vigilar la ejecución de sus medidas;**
- c) **Interponer las acciones** necesarias ante los órganos judiciales competentes en los casos de **incumplimiento de sus decisiones;**
- d) **Requerir** de los funcionarios públicos de la administración central y seccional, la información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones;
- e) Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección;
- f) **Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes;**
- g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia; y,
- h) Las demás que señale la ley.

La función primordial de la Junta de Protección es dictar y vigilar el cumplimiento de las medidas de protección a favor de las niñas, niños y adolescentes. Tienen potestad sancionadora respecto a las infracciones administrativas que establece el Código de la Niñez y Adolescencia, lo cual deberá determinarse en un proceso diferente del de las medidas.

Las decisiones de las Juntas Cantonales de Protección pueden ser impugnadas mediante recurso de reposición o de apelación ante el Juez de la Niñez y Adolescencia (CNA Art. 241).

2.2. NECESIDAD DE ARTICULAR LAS ACTUACIONES INSTITUCIONALES

Para cumplir del deber primordial de garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (CRE Art. 3.1), por mandato constitucional el estado está obligado a:

- **Prestar especial protección** a las personas en condición de doble vulnerabilidad (CRE art 45).
- **Adoptar** medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes “**protección y atención contra todo tipo de violencia**, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole [...] (CRE art 46.4)
- **Adoptar** las **medidas necesarias** para **prevenir, eliminar y sancionar** toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes [...] (CRE art. 66.3b).
- Generar las condiciones para la **protección integral** de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación [...] (CRE art. 341)
- Priorizar su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o **violencia**, o en virtud de su **condición etaria**, de salud o de discapacidad (CRE art. 341).

El estado ecuatoriano se organiza a través de funciones y asume una forma de funcionamiento sistémico para cumplir con su deber de garantizar el pleno ejercicio de los derechos.

El acto de violencia, según las competencias institucionales y las finalidades del sistema del que forman parte es objeto de abordaje diferenciado. Lo dicho es particularmente relevante para no incurrir en la superposición de acciones que pueden provocar la revictimización de la niña, niño y adolescente y asegurar el acceso efectivo a servicios especializados.

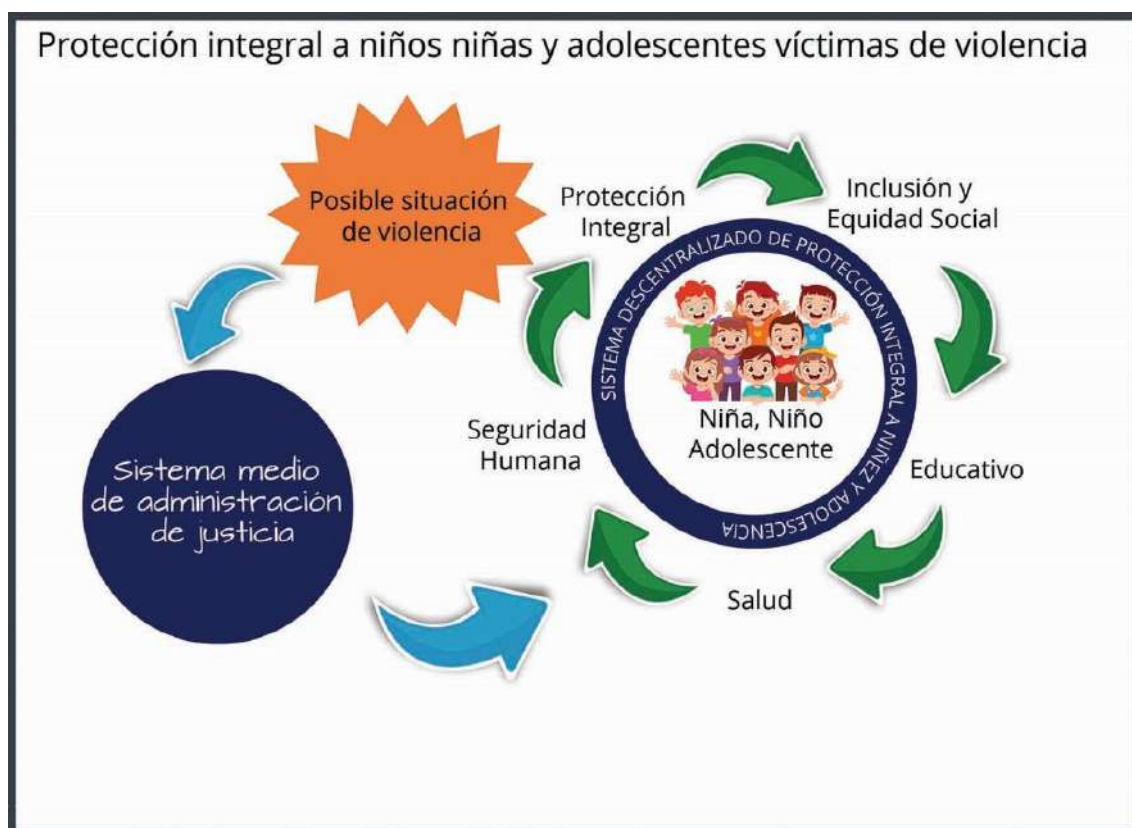
Por mandato constitucional, la protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El **sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes**. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias (CRE Art 341).

Las actuaciones institucionales que corresponden frente a la detección de una situación de violencia sexual y la consecuente derivación y atención, siendo complementarias, deben ser ejecutadas en el marco de las finalidades de la función (ejecutiva o judicial) a la que pertenecen y los objetivos del sistema del que forman parte (ver Anexo 1).

En el ámbito judicial se establecen sistemas que interactúan para la investigación fiscal, la protección a las víctimas y al sistema procesal como medio para la administración de justicia (ver Anexo2).

Todos los referentes institucionales del **Procedimiento especial de actuación unificada** forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Protección de Derechos establecido en la Constitución (CRE art. 341) y regulado por el Código de la Niñez y Adolescencia. Cabe indicar que sistema integra a la función ejecutiva (con sus responsabilidades en la definición, ejecución de las políticas y servicios públicos), a los órganos judiciales y que conforman la Justicia Especializada de Niñez y Adolescencia (CRE art. 175).

Las diferentes instancias con responsabilidad en el **Procedimiento especial de actuación unificada** cumplirán el objetivo asegurar la garantía de los derechos de la niña, niño y adolescente cuando sus actuaciones sean consistentes con la finalidad de cada uno de los sistemas en relación y las competencia y atribuciones legales que le corresponde. Lo anterior, contribuye a tener claridad respecto a lo que cada uno debe hacer y, a su vez, a lo que debe exigir de los demás actores; que la articulación tenga sentido y cumpla con el objetivo de garantizar la protección integral a lo largo de la vida de las niñas, niños y adolescentes, a través de políticas públicas y servicios públicos adecuados y con personal especializados para la protección y la restitución de los derechos.



Autora: Adriana Monesterolo (2020), fuente: Constitución y leyes de la República del Ecuador (CONA, COFJ, COIP, COESCOPE).

Gráfico 3: **Protección Integral a la niñez y adolescencia víctimas de violencia sexual**

Dra. Adriana Monesterolo Lencioni
Consultora UNICEF

La protección integral de la niñez y adolescencia exige acciones coordinadas por parte de las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos a la vez que es un mandato constitucional establecido para el cumplimiento de los fines institucionales y *“hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”* (CRE, Art.226).

Este deber de coordinación se comprende en el marco de las competencias y atribuciones constitucionales y legales, y en donde es preciso considerar que las *“personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley”* (CRE, Art.226).

Los procesos a ser implementados consideran el **acto de violencia desde óptimas distintas** por lo que tienen a su vez **objetivos diferenciados**. Respecto al presunto autor de la agresión, sin perjuicio de la responsabilidad civil por el daño a la que pudiera haber lugar, si la persona es servidora o servidor público cabe establecer la responsabilidad administrativa con la consecuente sanción disciplinaria y pena por probarse que es autor de una infracción penal de la que es responsable penalmente.

Es necesario velar porque estos procesos que involucran a servidoras y servidores públicos de varias instituciones cumplan con sus objetivos específicos y estén orientados a la búsqueda de respuestas idóneas y oportunas. La articulación institucional deberá tener en cuenta cómo cada uno de los procesos asegura la centralidad de la niña, niño y adolescente y contribuye a la integralidad de la atención desde los objetivos y competencias de cada uno, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niña, niño y adolescente, particularmente su opinión, su dignidad, privacidad e intimidad personal y su derecho a no ser revictimizado.

El alcance de cada uno de los procesos que se describen brevemente a continuación está limitado por la materia de este procedimiento a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y estarán centrados en el Interés superior del niño como sujeto pleno de derechos y que, en su condición de víctima de violencia, merece un trato digno que respete su individualidad.

CAPÍTULO TERCERO

DETECCIÓN, DERIVACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

El proceso de Protección Integral a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual está orientado garantizar la restitución de todos sus derechos y las condiciones para el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia. Comprende tres etapas que se ejecutan considerando los siguientes principios específicos de actuación.

3.1. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Este Procedimiento especial de actuación unificada en la detección, derivación y atención de situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes se estructura y organiza a partir de la centralidad del niño como sujeto de derechos y actor protagónico de los procesos que se abren una vez que se detecta una situación de violencia sexual contra niñas, niños y adolescente.

Las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, las cuales ya han sido referidas en el primer capítulo de este Procedimiento respecto al derecho al trato digno que merece una niña, niño o adolescente víctima de violencia, desarrollan los principios que deben ser asumidos por las y los servidoras y servidores públicos, profesionales y demás personas que intervienen con el fin de garantizar justicia para los niños víctimas y testigos de delitos.

Por su relevancia y claridad, a continuación, se transcriben textualmente.

a) Dignidad. Todo niño es una persona única y valiosa y, como tal, se deberá respetar y proteger su dignidad individual, sus necesidades particulares, sus intereses y su intimidad;

b) No discriminación. Todo niño tiene derecho a un trato equitativo y justo, independientemente de su raza, etnia, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos y linaje o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus tutores;

c) Interés superior del niño. Si bien deberán salvaguardarse los derechos de los delincuentes acusados o declarados culpables, todo niño tendrá derecho a que su interés superior sea la consideración primordial.

El interés superior del niño incluye el derecho a la protección y a una posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, en los términos que siguen:

- i. Protección, que comprende la protección “contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el abuso o el descuido físico, psicológico, mental y emocional”;
- ii. Desarrollo armonioso. Todo niño tiene derecho a crecer en un ambiente armonioso y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. En el caso de un niño que haya sido traumatizado, deberán adoptarse todas las medidas necesarias para que disfrute de un desarrollo saludable.

d) Derecho a la participación. Con sujeción al derecho procesal nacional, todo niño tiene derecho a expresar libremente y en sus propias palabras sus creencias, opiniones y pareceres sobre cualquier asunto, y a aportar su contribución, especialmente a las decisiones que le afecten, incluidas las adoptadas en el marco de cualquier proceso judicial, y a que esos puntos de vista sean tomados en consideración, según sus aptitudes, su edad, madurez intelectual y la evolución de su capacidad.

3.2. PAUTAS PARA EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN

La revictimización es una repetición de violencias contra quien ha sido previamente víctima de alguna agresión, aunque sea por omisión. La palabra revictimización también se refiere, de manera especial, a las vivencias de maltrato sufridas por los niños, niñas, adolescentes y sus familias en el transcurso **de intervenciones institucionales** después de la detección de una sospecha de delito sexual en su contra u otra manifestación de violencia. Se la denomina también como revictimización secundaria porque es inferida por las instituciones encargadas de la protección debido a deficiencias ligadas a la atención que deben brindar las instancias y profesionales que participan en una o varias de las etapas de la detección, derivación, atención y quienes están llamados a brindar seguridad y “hacer justicia” a una niña, niño o adolescente víctima de violencia en el sistema de administración de justicia.

La No revictimización es un derecho específico reconocido a favor de las víctimas de infracciones penales. No obstante, es preciso señalar que las diligencias de investigación, los procedimientos probatorios, la aplicación a las niñas, niños y adolescentes de las normas penales como si fuesen adultos y sin considerar su individualidad, desarrollo ni su interés superior, así como las debilidades de la protección institucional pueden configurar formas de vulnerar el derecho a la no revictimización de las niñas, niños y adolescente.

En lo que sigue, se desarrollan algunas reglas del Código Orgánico Integral Penal y pautas de actuación, para evitar incurrir en revictimización de la niña, niño y adolescente en cualquier intervención, las que en ningún caso son exhaustivas.

Pertinencia de diligencias investigativas y medios de prueba

Al reconocer el derecho a la No revictimización, el COIP enfatiza en formas específicas por las que se puede incurrir en la vulneración de este derecho al incluir la frase “particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, incluida su versión” (Art 11.5 COIP). Por ello, es

importante que las diligencias investigativas que se lleven a cabo sean idóneas y guarden pertinencia con los medios de prueba del delito en particular que se está investigando, considerado las circunstancias el hecho como el tiempo que ha transcurrido entre su ocurrencia y su detección.

En este sentido, por ejemplo, los operadores de justicia deberán interpretar y aplicar en el interés superior del niño las normas del COIP que son generales para las víctimas de violencia sexual. La dificultad particular respecto a la prueba de los delitos sexuales exige una mayor diligencia en la investigación fiscal, la cual es prioritaria por mandato legal, así como en quienes detectan una situación, por ejemplo, en un servicio de salud, de resguardar los indicios y/o emitir los informes de manera correcta para que sirvan como prueba en el procedimiento penal.

Realización y validez de exámenes médicos legales

Es importante sustentar la **pertinencia y validez de los exámenes médicos legales** realizados al amparo del **Código de la Niñez y Adolescencia** que contiene norma expresa²⁸ y que no exige la intervención de personal o profesional acreditado por el Consejo de la Judicatura²⁹:

- Los exámenes médico legales a un niño, niña o adolescente, se practicarán en estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad e integridad física y emocional del paciente.
- Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y recuperación, se prohíbe volver a someter a un niño, niña o adolescente víctima de alguna de las formas de maltrato o abuso señalados en este título, a un mismo examen o reconocimiento médico o legal.
- Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes, están obligados a conservar en condiciones de seguridad los elementos de prueba encontrados; y a rendir testimonio propio sobre el contenido de sus informes.
- Los informes de dichos exámenes, realizados por profesionales de establecimientos de salud públicos o privados y entidades de atención autorizadas, tendrán valor legal de informe pericial.

Oportunidad del apoyo terapéutico que requiere la niña, niño y adolescente

En general, se ha demostrado que transcurre demasiado tiempo desde la revelación o detección de la violencia sexual hasta la recepción del testimonio anticipado y la realización de diligencias de investigación que retardan que la niña, niño y adolescente pueda recibir oportunamente el tratamiento psicológico correspondiente. Lo dicho, no suele ser lo aconsejable si se pretende garantizar el interés superior del niño, como se justifica en las líneas que siguen.

²⁸ Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 80.

²⁹ COIP, Art. 450.

Cuando una niña, niño o adolescente es víctima de violencia sexual, se activan mecanismos internos propios para la reparación del daño físico y mental. En muchos casos estos hechos por su naturaleza traumática, requieren adicionalmente una serie de mecanismos externos (terapéuticos) para poder acceder a una elaboración adecuada del recuerdo. Mientras esto no ocurre, el niño, niña o adolescente puede experimentar síntomas muy perturbadores de ansiedad, angustia, temor, culpabilidad, miedo, vergüenza, sentimiento de desprotección, entre otros.

Por ello, lo deseable sería que este proceso de elaboración del recuerdo, se realice lo más rápidamente posible y que cada niña, niño o adolescente víctima de violencia sexual, reciba la protección y atención que requiera de tal forma que pueda alcanzar un mayor grado de salud y los síntomas no se agraven o se cronifiquen.

Un tratamiento terapéutico para reprocesar los hechos de violencia, podrían modificar en la mente del niño el recuerdo original. Por eso no pueden realizarse antes de que sea recogido su testimonio para no modificar su relato, ni invalidar las pruebas. Si su testimonio se recoge después de **8 o 10 meses** de ocurrido el hecho, el niño, niña, adolescente debe mantenerse todo este tiempo con los síntomas y temores antes descritos.

Cuando el proceso de detección, derivación y atención es eficiente y ocurre de manera prioritaria para los niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual, el tiempo que deben esperar para rendir su testimonio y demás pericias médicas y psicológicas se acorta (pocas semanas) y por ello pueden recibir lo antes posible los tratamientos completos para lograr su recuperación.

Sin embargo, cuando los procesos de administración de justicia son demasiado extensos pudiendo incluso tardar años, la niña, niño, adolescente no puede cerrar definitivamente el ciclo, ni recibir el tratamiento completo o adecuado para su bienestar y salud, convirtiéndose este hecho en una grave forma de revictimización institucional.

Mientras más tiempo dure el proceso de investigación mayor sufrimiento genera. Por ello es tan importante que su testimonio y demás pericias y diagnósticos sean tomados de manera anticipada por su interés superior.

Se garantizará el respeto a la niña, niño y adolescente,

- Al fijar día y hora para la recepción del testimonio anticipado en función del interés superior del niño y no de la agenda judicial
- Favorecer el acceso al apoyo terapéutico, sin que éste proceso pueda ser utilizado para minimizar la ocurrencia de la infracción, la culpabilidad o el daño a la niña, niño o adolescente.

Condiciones para la recepción del testimonio de la niña, niño y adolescente

En general, es muy importante que la testimonio de la niña, niño o adolescente se realice a la mayor brevedad posible y para ello la ley contempla la recepción anticipada del mismo.

Por tanto:

- Exprese a la niña, niño y adolescente que ha hecho lo correcto en revelar lo que ocurre.
- Considere la edad y las rutinas de la niña, niño y adolescente al fijar las horas para la realización de las diligencias investigativas y judiciales
- Evite que se realicen interrogatorios tendientes a desacreditar el relato del niño sin considerar su edad o desarrollo
- Evite preguntar detalles íntimos, por curiosidad.

Garantizar la atención prioritaria y preferente

En diversas actuaciones institucionales se pueden incurrir en la revictimización por no asegurar la atención prioritaria y preferente establecida en la Constitución. Así, una espera para atender a la niña, niño o adolescente víctima de violencia sexual, más allá de lo que puede ser razonable para la situación; o la existencia de espacios que no aseguren la privacidad ni la confidencialidad para la recepción de la denuncia, o del testimonio anticipado, la formulación de preguntas repetitivas y excesivas por parte de los sujetos procesales o la redundancia de exámenes periciales en torno al testimonio del niño y/o a las circunstancias en las que se produjo la infracción, entre otras.

Es también revictimización la dificultad de articulación y derivación entre las y los servidores públicos y profesionales de las distintas instituciones, lo que conlleva a que la niña, niño, adolescentes tengan que ir de una institución a otra, sin que ninguna se haga cargo; considerando que no es de su competencia, de modo que al fin nadie se responsabiliza, con el agravante de que tampoco existe ningún tipo de seguimiento del proceso.

Al atender una situación de violencia:

- Actúe de forma inmediata
- Reporte la *noticia críminis*, inmediatamente cuando se tenga sospecha de la comisión de un delito
- Asegure la prioridad de la investigación fiscal
- Busque un espacio que permita la privacidad, donde se garantice la confidencialidad y respeto de todos los derechos del niño, niña, adolescente.
- Adopte las medidas de protección que se requieran y/o sean solicitadas con la debida diligencia y en el menor tiempo posible

Proteger del contacto con el presunto agresor

Es importante asegurar que la niña, niño o adolescente no tenga contacto con el presunto agresor. En ocasiones, no se considera que el brindar auxilio inmediato y la protección a la niña, niño o adolescente incluye el resguardarle de estar o permanecer físicamente en el mismo espacio o junto a su agresor o agresora, cuya sola presencia, y sin necesidad que la niña, niño o adolescente lo exprese verbalmente, es intimidante y puede llegar a ser también amenazante.

Por ello, en cualquier intervención:

- Nunca confronte al niño, niña o adolescente con el agresor o la agresora.
- Tampoco traslade en el mismo vehículo a la niña, niño o adolescente junto con su presunto agresor;
- Asegúrese que, a la espera de cualquier atención o diligencia judicial, no estén en el mismo espacio físico o sala la niña, niño y adolescente con su presunto agresor o su abogado defensor;
- Priorice siempre la salida del agresor del espacio de convivencia común, y no sacrifique la salida de la niña, niño o adolescente por cuestiones de carácter económico o sostenimiento del grupo familiar.
- Asegúrese que el presunto agresor o su abogado defensor NO tenga acceso al espacio educativo de la niña, niño o adolescente.
- Utilice correctamente la cámara de Gessel, que mantiene estos espacios diferenciados.

Trato digno y comprensivo

Lo más característico de la revictimización es el trato que recibe un niño, niña o adolescente, considerado más como “un objeto”, que como sujeto que ha sido vulnerado en sus derechos, que sufre a raíz del daño experimentado, lo cual explica el derecho a un trato digno y comprensivo establecido por las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (2005) y que demanda **profesionales capacitados que actúen con tacto, respeto y rigor**.

En este contexto, es sumamente importante la “actitud” de la persona que conoce o detecta el hecho de violencia que ha sido develado por la niña, niño o adolescente. Su actitud debe ser respetuosa y cuidadosa para no invadir o violentar de ninguna manera la dignidad de la niña, niño o adolescente. Esto le permite sentir confianza y protección.

Las servidoras públicas, los servidores públicos, profesional y demás personas garantizarán el respeto a la niña, niño y adolescente, un trato digno y adecuado y evitarán la revictimización, cuando:

- Considere primordial, durante el proceso, el interés superior de la persona del niño, niña, adolescente.
- Custodie el expediente que contenga información sobre la situación por la cual se activó algún protocolo. Para asegurar la privacidad y la seguridad, este expediente debe estar separado del académico (en el caso del sistema educativo) y con acceso restringido.
- Mantenga la confidencialidad de la información.

Al atender una situación de violencia:

- Nunca emita opiniones personales, juicios de valor o cuestione la situación de violencia.
- No se refiera a la persona del niño, niña o adolescente como “víctima”.
- No culpabilice, niegue o minimice la violencia sexual relatada por el niño, niña o adolescente.
- Expresé a la niña, niño y adolescente que es muy valiente al contar lo que sucede.
- Preste la debida consideración a las opiniones y preocupaciones de la niña, niño y adolescente y, si no les es posible atenderlas, explíquele las causas.
- No prometa lo que no puede cumplir.
- Evite que la niña, niño o adolescente le cuente el relato a personas que no van a poder ayudarle o a varias personas, sea en el centro educativo o en otras instituciones.

3.3. ACTUACIÓN ARTICULADA EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

Una respuesta al alcance de las niñas, niños y adolescentes debe asegurar **dos tipos de procesos indispensables** para la protección de sus derechos y cuyos objetivos son diferentes. Los procesos a ser implementados consideran el acto de violencia desde ópticas distintas por lo que tienen a su vez objetivos específicos y diferenciados.

El primero relativo al acompañamiento a la niña, niño y adolescentes en todas las dimensiones que se han visto afectadas por la ocurrencia de la violencia o por el riesgo de que ésta se produzca. La Junta Cantonal de Protección de Derechos es la autoridad administrativa con competencias para dictar medidas de protección y tiene la ventaja de una presencia más cercana en el territorio.

Para que la Junta Cantonal de Protección de Derechos ordene una o varias medidas de protección al amparo del Código de la Niñez y Adolescencia es suficiente la existencia de riesgo

inminente de violencia de cualquier tipo y en este sentido se comprende los conceptos amplios de maltrato³⁰ y de abuso sexual³¹ de este cuerpo legal. No corresponde a la Junta Cantonal de Protección de Derechos indagar ni calificar si determinada conducta constituye o no infracción penal; y, por tanto, en caso de sospecha, deberá reportar o derivar a la fiscalía para la investigación, sin perjuicio de que siga con la implementación de las medidas de protección que adopte y su seguimiento.

Respecto a las Juntas cantonales de protección de derechos, cabe indicar que la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres confiere a las Juntas de Protección de Derechos atribuciones para disponer medidas de protección inmediatas³² *“para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual; y, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y de sus dependientes”* en concordancia con el eje de protección que prevé la ley y que *“buscará garantizar la integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia y de las víctimas indirectas, así como su dignidad, autonomía, integridad y bienestar, considerando los factores de vulnerabilidad y de riesgo y soporte a las medidas dictadas a través del Sistema de Administración de Justicia o generación de medidas administrativas necesarias a favor de las víctimas de violencia, cuyos casos no se judicializan”* (LOPEVCM, art.45).

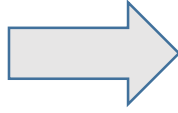
³⁰ CONA Art. 67.- Concepto de maltrato. Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar **daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual** de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad.

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado.

³¹ CONA Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio. Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesto en conocimiento del Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan.

³² LEY PARA PREVENIR y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, Art. 47.” Medidas de protección inmediata. Las medidas de protección serán de carácter inmediato y provisional; tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o vulneración de la vida e integridad, en relación con los actos de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, determinados en este cuerpo legal. El ente rector del Sistema deberá disponer para todas las entidades del sector público y privado el determinar medidas administrativas o internas de prevención y protección en caso de cualquier acto de violencia de los establecidos en esta Ley”.

PROTECCIÓN
INTEGRAL
A LA
NIÑA, NIÑO
Y ADOLESCENTE



Objetivo centrado en la Protección y restitución de los derechos de la niña, niño y adolescente.

Se concreta en la adopción de medidas de protección y el seguimiento a su cumplimiento

Autoridad competente: Junta Cantonal de Protección de Derechos

No requiere investigación sobre existencia de delito.

En caso de sospecha, Junta pone en conocimiento del Sistema de investigación o del fiscal.

En este proceso centrado en la protección reforzada que el Estado debe brindar al niño, niña o adolescente es preciso comprender el sentido y alcance de las medidas de protección, en donde todas las que se dispongan tienen incidencia en la protección de los derechos y en la reparación del daño. Su carácter es lo que diferencia unas de otras: Unas son inmediatas emergentes y puntuales relacionadas más con la cesación del acto de vulneración y la seguridad personal del niño y tienen incidencia en su afectación emocional y su rehabilitación mientras que otras tienen un carácter de proceso e inciden directamente en la rehabilitación, garantía de no repetición y reparación integral.

Asumidas las medidas de protección como proceso centrado en la niña, niño y adolescente, éstas deberán ser dictadas y ejecutadas de modo tal que acompañen a la niña, niño y adolescente, según su singularidad, su historia personal, su contexto y sus necesidades emocionales, afectivas y de toda índole, por tanto, sean idóneas para brindar las condiciones de seguridad personal, atención, protección especial como dimensión de la protección integral de sus derechos para su desarrollo integral.

Una medida aporta a varias de las dimensiones de la niña, niño o adolescente que ha sido vulnerado en sus derechos, aunque puede incidir prioritariamente en una de ellas. Por ejemplo, la medida de alejamiento del agresor de la vivienda evita que se repita el hecho, genera seguridad en el niño y da tranquilidad y alivio emocional en el niño.

Desde la indivisibilidad, interdependencia e integralidad de los derechos, no existe una jerarquización de las medidas, sino que todas son necesarias y se implementan en diferentes momentos del proceso de protección.

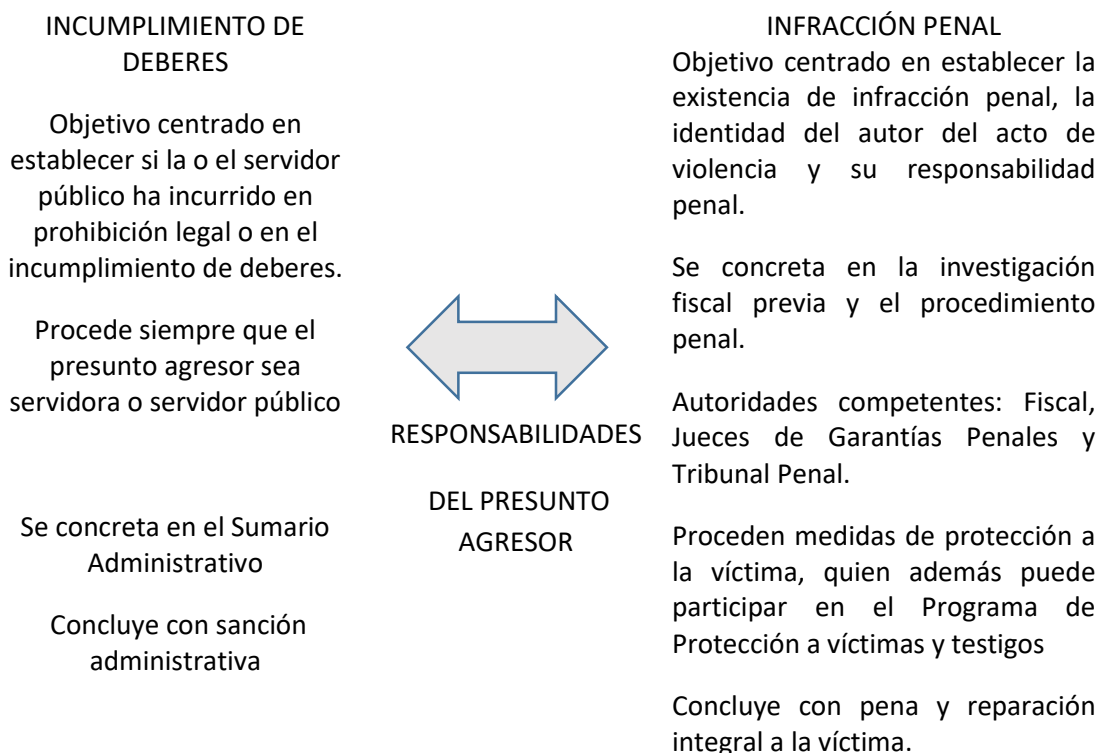
Por eso es necesario comprender y visualizar que no es suficiente una medida de protección, sino que eventualmente pueden ser todas y cada una, desde el análisis de la persona del niño,

niña y adolescente que requiere de las mismas, en su condición de víctima directa de un delito contra su integridad sexual o indirecta de los mismos delitos.

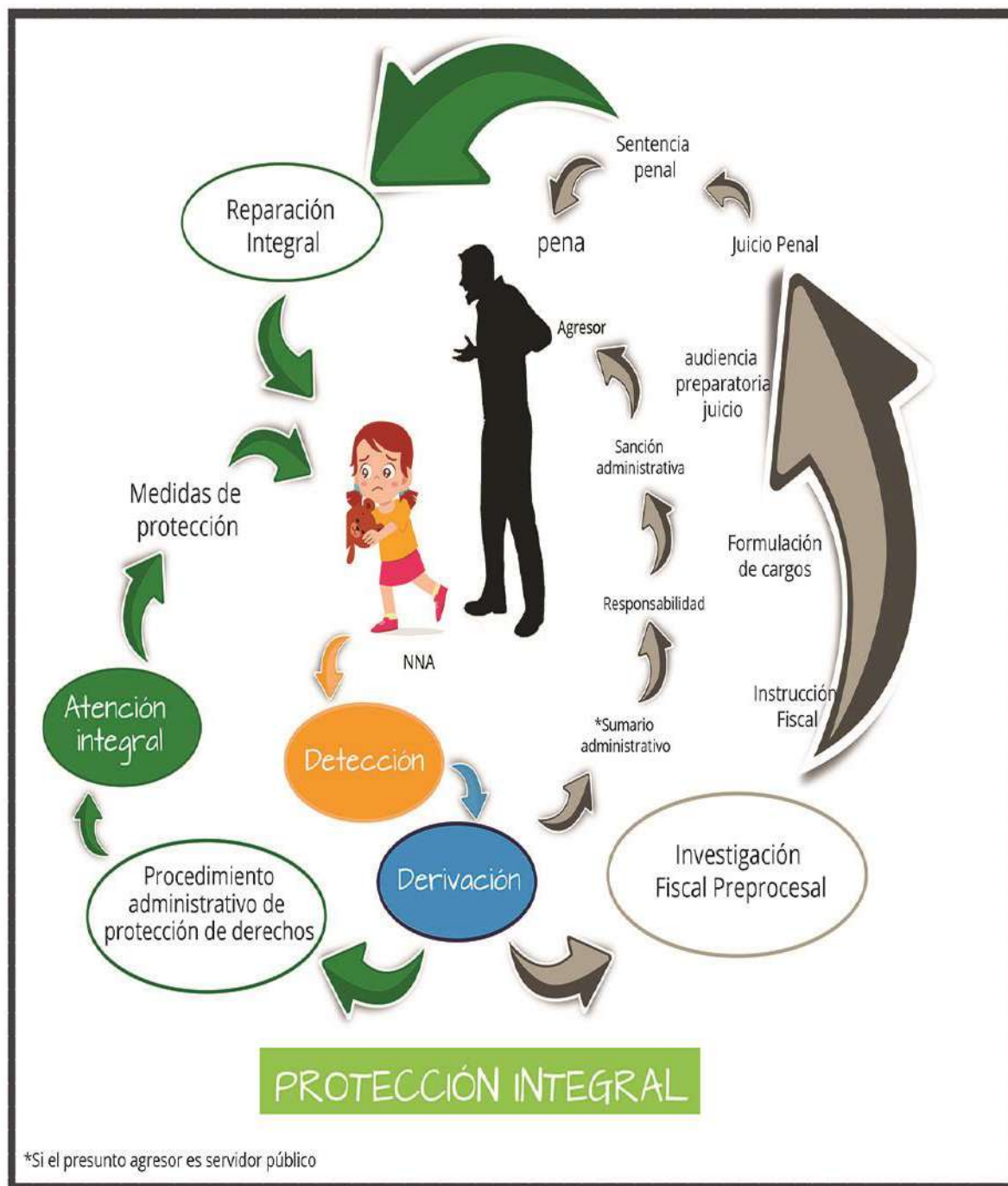
A falta de Junta Cantonal de Protección de Derechos en el territorio donde se detecta la situación de violencia, los tenientes políticos pueden ejecutar actos urgentes, en base a la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres³³, con competencias para asegurar la protección de los derechos del niño, niña y adolescente.

Cabe indicar que, dentro del procedimiento penal, la jueza y el juez a petición de la o el fiscal dispondrá de manera obligatoria las medidas de protección que fueren necesarias. Cuando esto suceda, la Junta declinará su competencia. En todo caso es responsabilidad de las autoridades asegurar el continuum de la atención integral.

El segundo tipo de proceso tiene como objetivo identificar a la persona que ha incurrido en un acto de violencia contra las niñas, niños y adolescentes y determinar su responsabilidad administrativa o penal.



³³ Para efectos de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, el Artículo 10 en su literal c) define violencia sexual: “ Toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas. También es violencia sexual la implicación de niñas y adolescentes en actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que se encuentre en situación de ventaja frente a ellas, sea por su edad, por razones de su mayor desarrollo físico o mental, por la relación de parentesco, afectiva o de confianza que lo une a la niña o adolescente, por su ubicación de autoridad o poder; el embarazo temprano en niñas y adolescentes, el matrimonio en edad temprana, la mutilación genital femenina y la utilización de la imagen de las niñas y adolescentes en pornografía.



Autora: Adriana Monesterolo Lencioni (2020)

Gráfico 4: **Protección integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.**

Para la niña, niño y adolescente estos procesos también son importante en el sentido de que le genera una cierta tranquilidad el saber que a alguien le preocupa su situación y que no está expuesta permanentemente a sufrir otra vez la situación. A su vez, cuando nadie hace nada frente a una situación, puede generarse una sensación de impunidad y de indefensión que le puede llevar a la persona a aplicar la justicia por propia mano.

En cualquier servicio donde la niña, niño o adolescente pudo haber sufrido un acto de violencia en su contra por parte de un servidor público, sin perjuicio de que se ponga en conocimiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos para la protección de los derechos del niño o de la Fiscalía para la investigación de la posible infracción penal, se podrá iniciar un sumario administrativo para determinar la responsabilidad administrativa con las respectivas sanciones.

La responsabilidad penal se establece en el procedimiento penal, en el que previamente se requiere de la investigación por parte de una fiscal o un fiscal, quien una vez que ha determinado que se cumplen en el acto de violencia los elementos que configuran el tipo penal y la participación del sospechoso en el mismo, ejerce la acción penal en el procedimiento con la finalidad de obtener una sentencia condenatoria, la cual representa en sí misma para la víctima una forma de reparación integral.

No existe un orden particular en la implementación de los procesos cuando el tiempo transcurrido entre el cometimiento del acto de violencia y su detección es distante; en caso de delito flagrante, se deberá priorizar la atención en el sistema de salud y la investigación fiscal, como consta más adelante.

Desde la centralidad de la niña, niño y adolescente en todo caso, será necesario asegurar la protección integral que requiera y la investigación (administrativa o fiscal) todo lo cual contribuye a generar las condiciones de cierta seguridad que la niña, niño o adolescente requiere.

La debida diligencia exige concretar la adopción de las medidas de protección establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, las cuales tienen una dimensión preventiva, de protección y restitución de los derechos. La atención integral será posible en el contexto de políticas y servicios públicos idóneos y especializados para hacer efectivos el ejercicio pleno de todos los derechos de las niñas, niños y adolescente, tal como prescribe el artículo 85.1 de la Constitución.

La articulación institucional deberá tener en cuenta cómo cada uno de los procesos contribuye a la integralidad de la atención desde los objetivos que cada uno tiene y asegura la centralidad de la niña, niño y adolescente a fin de garantizar la protección integral, particularmente su opinión, su dignidad, privacidad e intimidad personal y su derecho a no ser revictimizado.

Finalmente, es preciso recordar que las y los servidores públicos que intervienen en cualquier etapa del procedimiento especial de actuación unificada también responden por sus actuaciones y pueden ser sujetos de sanciones administrativas por el incumplimiento de sus atribuciones. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que cada sector pueda establecer, el Consejo de la Judicatura tiene un rol de especial relevancia respecto a los operadores de justicia y podrá hacer seguimiento a las investigaciones y procedimientos penales que se sigan por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes a fin de determinar si se ha cumplido con el estándar de la debida diligencia para los fines consiguientes.

3.4. ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL EN DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Se entiende como etapas de la intervención el conjunto secuencial y articulado de actuaciones institucionales que se requieren para garantizar de manera integral los derechos de la niña, niño y adolescentes víctima de violencia sexual. Para este Procedimiento especial de actuación unificada se consideran tres etapas que contribuyen a la protección: detección, derivación y atención integral.

La fase inicial de la detección tiene una relación de relativa independencia respecto a la derivación y atención. En este sentido cabe indicar que aunque cada una tiene actividades específicas también algunas de ellas se van sobreponiendo asegurando un proceso continuo. Es por ello que algunas acciones que se realizan en la derivación son también parte de la etapa de la atención.

Las tres etapas con las actividades a ser realizadas por las servidoras y servidores públicos de las instituciones y demás personas y profesionales que participan en algún momento concreto o específico (por ejemplo, las personas que detectan y luego son testigos en el proceso penal) en su conjunto y cuando éstas se ejecutan de manera idónea y oportuna dan cumplimiento a la protección integral de los derechos de la niña, niño y adolescente.

Por otro lado, y como antecedente para el desarrollo de cada una de las etapas del proceso de intervención es necesario precisar que cualquier clase de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, o el riesgo de que ocurra, exige por parte del estado un conjunto de condiciones institucionales idóneas para dar una respuesta integral, sistémica, ágil y oportuna.

3.5. MIRADAS NECESARIAS PARA ACOMPAÑAR LAS ETAPAS

La violencia es un fenómeno cultural y social que se aprende según diversos autores, por lo tanto, al igual que se aprende se puede desaprender; es necesario comprender que vivimos inmersos en esta cultura de violencia. De hecho, en Ecuador se habla de la violencia como fenómeno cultural que atraviesa todas las esferas de la vida social y todos los estratos.

Partiendo de lo dicho sobre la violencia, es importante tomar conciencia de que todos estamos inmersos y tenemos conductas y actitudes violentas; las actitudes y conductas violentas se manifiestan en el ejercicio del poder de unos sobre otros, en este caso de los adultos sobre los niños, niñas y adolescentes, y también de los profesionales y las instituciones (Estado) sobre los usuarios o en las situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes sobre los propios niños, niñas y adolescentes así como de sus familias.

Para este procedimiento especial de actuación unificada es necesario que los profesionales y las instituciones se revisen, despojen y desaprendan estas creencias que están interiorizadas y las ejecutamos inconscientemente.

Una intervención centrada en el niño, niña y adolescente en cualquiera de las etapas requiere de una mirada personal e institucional (es decir de todos los actores que se detallan en las diferentes etapas) y que debe considerar diferentes niveles:

1. La situación personal;
2. El contexto familiar y comunitario
3. El contexto socio cultural e histórico

Significa que los actores que intervienen en cada etapa de este procedimiento se tienen que despojar de determinadas creencias e ideologías que están interiorizadas históricamente como son:

- La invisibilización de la niña, niño y adolescente como persona y sujeto de derechos
- La cultura patriarcal y machista que reproduce relaciones asimétricas y jerarquizadas y se manifiesta en el ejercicio del poder sobre aquellas personas que considera en situación de inferioridad, en concreto los niños, niñas y adolescentes, por su edad y desarrollo y las niñas por la construcción social.
- La violencia como práctica cultural que está normalizada e interiorizada y no se visibiliza como violencia o se justifica; y, respecto al niño, niña y adolescente incluso se la justifica como práctica disciplinaria.

Por lo anterior, se trata de comprender el fenómeno en toda su intensidad y complejidad para que la intervención sea la adecuada y genere la protección de derechos y el cambio en las personas; lo que pasa también por cada uno de los servidoras y servidores públicos, tanto como personas como profesionales que tienen responsabilidades y participan en estas diferentes etapas.

3.6. ETAPA DE LA DETECCIÓN

Definición

La Detección se refiere a la identificación o sospecha de la existencia de un acto de violencia sexual o posible delito cometido en contra de niñas, niños o adolescentes a partir de ciertos signos, síntomas, relatos o indicadores que nos alertan sobre dicha situación de vulneración de derechos.

Para efectos de este procedimiento especial de actuación unificada, se distinguen dos tipos generales de detecciones de situaciones de violencia sexual, en base a la actividad primordial del personal del sistema de investigación de la fiscalía. En la primera categoría la fiscalía recibe por parte de quien detecta la *noticia criminis* y en este sentido la fiscal o el fiscal interviene en la segunda fase porque recibe la derivación de la sospecha de delito contra uno o más niñas, niños y adolescentes determinados. El segundo tipo, se sustenta en la actividad investigativa de

carácter proactivo por parte de la Policía Nacional y sus unidades especializadas en el marco del sistema de investigaciones, medicina legal y ciencias forenses a cargo de la fiscalía³⁴.

La persona o sujeto que detecta ésta alerta o acto de violencia, se encuentra en contacto directo con la niña, niño o adolescente o es contactado por la familia o comunidad. Puede corresponder a cualquier persona o a alguien que es servidora pública o servidor público, empleado o profesional que identifica la situación en el cumplimiento de sus funciones, en el ámbito público o privado.

En el caso de otro tipo de delitos como el *grooming*, entre otros, en los que se utilizan medios informáticos, la detección puede surgir como consecuencia de una investigación planificada y liderada por la fiscalía en el cumplimiento de sus funciones o de un proceso de investigación policial de posibles delitos en contra de niñas, niños o adolescentes en el marco del sistema especializado de investigación. En este caso los signos de alerta o detección, corresponderán a indicios tales como fotografías, páginas web, documentos, conversaciones digitales, etc.

En la mayoría de casos los signos, síntomas o indicios son observables. Pero, salvo el caso de fiscalía, no corresponde en esta etapa a los sujetos o personas que detectan determinar la existencia de un delito o no, ni tampoco realizar acciones de investigación.

La detección de signos, síntomas o relatos, pueden corresponder a un acto de violencia sexual reciente o distante en el tiempo. El abordaje será diferenciado de acuerdo al tiempo transcurrido, así como la derivación se realizará de forma específica en caso de requerir auxilio inmediato o atención médica emergente, o si se requiere de iniciar directamente la investigación por parte de fiscalía.

Signos y síntomas

Consiste en la identificación de síntomas y signos observables que pueden ser físicos, emocionales, conductuales o cognitivos, por parte de familiares, personas a cargo del cuidado de la niña, niño, adolescente, o personas cercanas a su contexto cotidiano, los mismos que pueden estar acompañados por la revelación del acto de violencia o no.

Los síntomas y signos significativos de alerta de una posible violencia sexual contra de niñas, niños y adolescentes, se recogen en las tablas de indicadores físicos, psicológicos y conductuales desarrollados por el sistema de salud (MSP) que constan en el anexo.³⁵

Existen signos y síntomas generales que alertan sobre la presencia de violencia hacia niñas niños y adolescentes, por ejemplo: angustia, conducta retraída, aislamiento, agresividad, tristeza, miedo, ausencia escolar, indicadores físicos como golpes, quemaduras, etc.

³⁴ Si bien la detección por medio de investigación policial sirve para todos los delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes puede cobrar especial relevancia en Inseminación no consentida (COIP Art. 164), Privación forzada de capacidad de reproducción (COIP Art. 165), Utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual (COIP Art. 172), Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos (COIP Art. 173), Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos (Art. 174).

³⁵ Anexo cuadro de indicadores físicos, psicológicos de maltrato sexual. Atención integral de violencia de género MSP. Norma técnica 2014.

Otros indicadores conductuales específicos pueden incrementar la sospecha de la posible presencia de un delito de tipo sexual. Estos se refieren por ejemplo además de los citados anteriormente a conductas sexuales no adecuadas a la edad, hipersexualización, repetición de conductas sexuales con otros niños/ niñas, conocimiento o lenguaje sexual no apropiado a la edad, además de síntomas físicos como dolor o heridas en área genital, ETS, embarazo precoz, infecciones del sistema genito-urinario a repetición, infecciones en la boca, etc.

Estos síntomas por sí solos no son indicadores inequívocos de que se ha producido un hecho de violencia sexual, pero alertan la sospecha. De la misma forma, la ausencia u ocultamiento de alguno de ellos no indica que la niña, niño o adolescente no ha sido víctima del posible delito. Por ello se requiere la investigación respectiva.

Develación

A diferencia del maltrato o violencia física o psicológica, que tienen un nivel de tolerancia social de relativa aceptación, por ser considerados culturalmente utilizados como formas de disciplinar a los niños, la violencia sexual a nivel social tiene un nivel de tolerancia nulo o casi nulo. Por ello es necesario su ocultamiento por parte del agresor y la víctima. La visibilidad dentro de los contextos familiares y sociales es mínima.

El agresor requiere mantener el control de esta información por lo que manipula al niño, niña adolescente para mantener el secreto, diciendo por ejemplo que no debe contarle a nadie porque “No le creerán”. Puede utilizar la amenaza y la intimidación. Lo que busca es mantener el silencio para continuar progresivamente con las conductas abusivas.³⁶

Otros factores se refieren a la coerción por parte del abusador, quien manipula al niño, niña o adolescente, responsabilizándole por los hechos ocurridos, y colocando la “culpa” y las consecuencias negativas en sus hombros. Esto genera en el niño, niña, adolescente, miedo a las consecuencias negativas, miedo de que no le crean y/o de ser separado de su familia.

Las emociones que esto genera en el niño, niña o adolescente son demasiado angustiantes y perturbadoras. Se presenta ansiedad, desesperanza, desprotección, sentimiento de invisibilidad, parálisis, disociación, estrés.

Si la niña, niño, adolescente pide ayuda y devela el abuso, y la persona que recibe la información, no le cree o duda de su relato, la niña, niño, adolescente verifica que el agresor tenía razón y es más difícil que revele nuevos abusos o hechos de violencia sexual, quedando en mayor desprotección.

Por ello es tan importante que se dé la relevancia y el cuidado a la develación del hecho por parte de la niña, niño, adolescente, porque el proceso de sacarlo a la luz es sumamente fuerte y difícil para él/ella. Comprendamos que puede estar viviendo amenazas de violencia explícita o

³⁶ Baita Sandra y Moreno Paola (2015), Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes para su tratamiento en la Justicia, Uruguay.

implícita que impiden la develación o promueven el retractamiento posterior en caso de no encontrar la protección que requería.

Con la develación del hecho se puede comprender mejor los síntomas anteriormente descritos.

“El indicador psicológico más importante y específico para detectar la violencia sexual es el relato infantil”

Sandra Baita

Si bien se desarrolla en la etapa de la atención, cabe indicar, que luego del develamiento o durante la investigación del hecho puede darse en algunos casos la retractación por parte del niño, niña o adolescente. También podría ocurrir que el relato o los hechos descritos inicialmente sean minimizados o negados por completo.

Indicios de delitos informáticos de violencia sexual

En cuanto a la detección de delitos sexuales informáticos, se evidencian otro tipo de indicios materiales que revelan la presencia de un posible delito contra niñas, niños o adolescentes. El acceso a dichos indicios deriva de la investigación realizada por la Policía Nacional o de la Unidad de delitos informáticos de la Fiscalía.

Puede referirse a indicios materiales o digitales en redes sociales, chats, fotografías, documentos, entre otros.

Alcance

Para efectos de este procedimiento, la fase de la detección va desde la identificación de los signos o síntomas directos de violencia o posible delito sexual (o al contar los signos de delitos informáticos sin la presencia directa), hasta que se reporta la sospecha, se requiere auxilio o se presenta la denuncia de la situación a la autoridad correspondiente.

Relevancia

- La Detección de la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes da paso a un conjunto de actuaciones orientadas a la protección integral de la niña, niño o adolescente.
- Su importancia radica en que esta acción implica para la niña, niño, adolescente la posibilidad de que la situación que le afecta, salga a la luz y pueda por fin detenerse, dejar de ser un secreto que lastima y pueda recibir la ayuda que requiere.
- Sin la detección, la amenaza continúa, también es posible que la violencia se repita y se cronifique, o se ejecuten otras infracciones penales en su contra. Por ello la detección es la posibilidad de una liberación.

- Cuando la niña, niño, adolescente devela la violencia de la que ha sido o sigue siendo víctima, está pidiendo ayuda a la persona con quien lo comenta, abre la posibilidad de recibir apoyo y protección. Si el abuso es detectado por alguien a partir de los síntomas o signos, implica que la niña, niño o adolescente es observado, teniendo en cuenta, que hay alguien que está pendiente de su situación y puede ayudarlo.

La detección como forma de prevención

La detección de una sospecha de delito sexual, en sí mismo puede ser un mecanismo de prevención porque puede evitar que la violencia sexual se mantenga o progresivamente alcance niveles más altos en intensidad o la aparición de nuevos delitos. Por ejemplo, un niño, niña o adolescente podría ser víctima inicialmente de acoso sexual o ciber acoso (*grooming*), posteriormente vivir una situación de abuso sexual y finalmente una violación.

Se conoce que la violencia sexual aumenta en intensidad y es un proceso progresivo que tiende a repetirse porque genera placer en el agresor. Por ello, una detección temprana constituye una forma de prevenir nuevas situaciones de violencia y/o posibles delitos en contra de las niñas, niños y adolescentes.

Si no hay una detección del hecho de violencia, o si quien detecta no toma ninguna medida, el agresor podría continuar por años cometiendo delitos en contra del niño, niña o adolescente. Sin la detección y la posterior denuncia, estos delitos quedan en la impunidad y la niña, niño, adolescente en total desprotección.

Una situación tan alarmante y devastadora puede acarrear trastornos físicos y psicológicos de gravedad tales como: trastornos de personalidad, trastornos psicóticos, trastorno de estrés post traumático, trastorno de estrés agudo, trastornos alimenticios, depresivos etc.

El impacto puede evidenciarse a corto, mediano o largo plazo e incluso las secuelas pueden aparecer en la edad adulta.

Es muy importante la detección y actuación de manera temprana, para brindar la prevención de nuevos hechos de violencia en contra de ese niño, niña, adolescente específico, así como de la garantía de la no repetición del hecho en contra de otros.

Actores en la detección

Para efecto de este proceso se enuncian los posibles sujetos de detección de la violencia sexual contra las niñas, niños o adolescentes a los siguientes:

- Centros de salud/Hospital. Centros médicos de la red complementaria, MSP.
- Centros educativos (DECE)/Junta distrital de Resolución de conflictos, MINEDUC.
- Técnicos de acompañamiento familiar y otros servicios del MIES: atención domiciliar, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), Servicios de protección especial, etc.
- Club/ Organizaciones-asociaciones deportivas, MDC.
- SPI, Servicios de Protección Integral – Secretaría de Derechos Humanos.

- Personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses
- Junta Cantonal de Protección de Derechos
- Defensorías Comunitarias

Momentos y actividades en la etapa de la detección

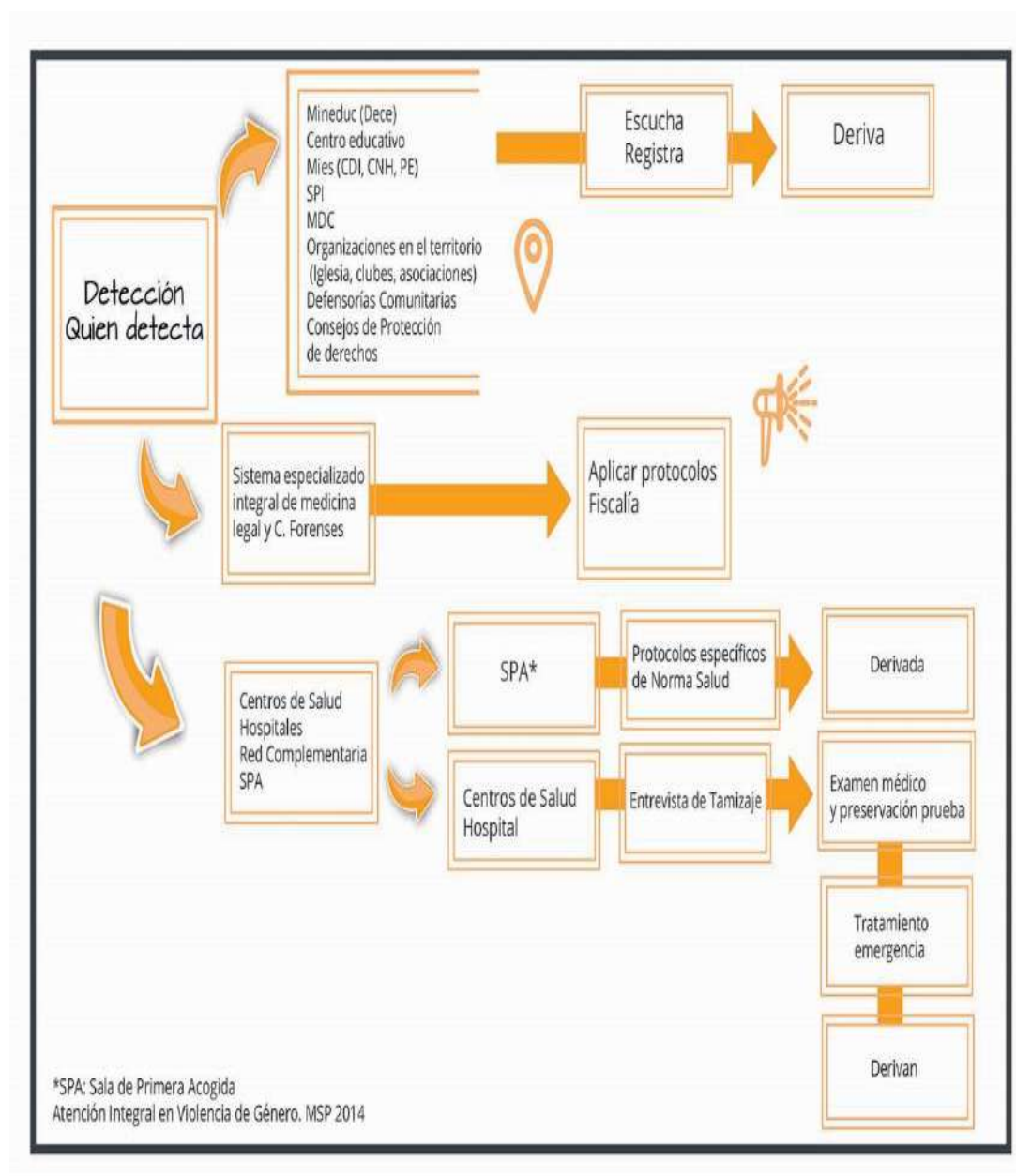
La detección tiene los siguientes momentos:

1. Detectar: la detección puede darse por alguno de estas posibilidades de entrada:

- Develación: el niño, niña o adolescentes devela a la persona el acto de violencia en su contra de manera inmediata o distante en el tiempo.
- Identificación de signos, síntomas reveladores por parte de personas que están en relación directa con el niño, niña o adolescentes, que hace sospechar la posible violencia sexual.
- Testigos del hecho: delito cometido de manera flagrante.
- Por noticia o investigación de Policía Nacional, personal del Sistema Especializado integral de Investigación, de medicina legal y ciencias forenses o Fiscalía.

1. Actuación inicial

La actuación inicial después de la detección varía según **el sujeto** que detecta el hecho de violencia sexual.



Autora: Adriana Monesterolo Lencioni (2020).

Gráfico 5: **Actuación inicial centrada en la niña, niño y adolescente**

DETECCIÓN: Actuación inicial

Detección actores del territorio: Ministerio de Educación, Mies, MDC, organizaciones del territorio, SPI, familia y comunidad, etc.

La acción de la mayoría de los sujetos/ personas que detectan se limitará a escuchar y registrar los hechos exactos, con referencia de fecha y hora y el relato textual del niño, niña, adolescente en algún registro destinado para este fin específico. No se repetirá varias veces el relato a diferentes sujetos, solamente a la persona que lo ha confiado.

Detección por investigación por parte del personal del Sistema de investigación, medicina legal y ciencias forenses: Una investigación policial realizada por iniciativa del Sistema o en el marco de la cooperación internacional, puede derivar en la detección de delitos contra la integridad sexual y reproductiva como aquellos en los que se utilizan medios electrónicos. Se aplican procedimientos específicos de Fiscalía.

Detección por parte del Sistema de salud: cuando la detección se da desde el sistema de salud, sea por la ocurrencia de un delito flagrante o en caso de una detección de una posible infracción penal que sucedió hace tiempo, tiene una relevancia especial que no se asemeja a la intervención que realizan otras instituciones.

El Ministerio de Salud Pública cuentan con un procedimiento y atribuciones específicas porque su actuación corresponde tanto a la aplicación de posibles tratamientos de emergencia, así como la ejecución de exámenes médicos específicos y la obtención de muestras en donde será necesario adoptar las medidas necesarias según la edad y género para precautelar la dignidad e integridad física y psicológica de la niña, niño y adolescente (COIP, art. 463).

Su papel dentro de este momento puede requerir una intervención inmediata cuyas acciones cuando no se dispone del personal del sistema especializado de investigación de medicina legal con el fin de asegurar los vestigios se recogerá en registros específicos siguiendo las reglas del COIP:

- Identificación de signos y síntomas de delito sexual
- Examen médico para recoger muestras físicas. (ante delito flagrante)
- Interconsulta con salud mental y trabajo social.
- Aplicar protocolos de tratamientos en salud para violencia sexual.³⁷

La detección de casos Violencia de género puede darse por 3 vías: la demanda de atención por parte del usuario, derivación por parte del sistema de justicia, por detección por indicadores de sospecha. Las entrevistas de tamizaje de casos de violencia tienen la finalidad de identificar casos de riesgo para brindar atención y detectar esta problemática, así como ofrecer información a las personas posibles víctimas para ir desnaturalizando la violencia y ampliando las posibilidades de acceder a la ayuda.

Protocolos de salud:³⁸

- Se describe la existencia y funcionamiento de las Salas de Primera Acogida, SPA, como espacios específicos para la atención especializada en situaciones de emergencia por violencia de género y peritajes en caso de violencia sexual. Las SPA, cuentan con un equipo multidisciplinario compuesto por un médico/a (acreditado por el Consejo de la Judicatura), un psicólogo/a, una enfermera/o, y un trabajador/a social.
- La Norma hace mucho énfasis en las actuaciones del equipo de salud, para que guarde concordancia con el proceso penal en casos de violencia sexual. Se describen de forma

³⁷ Ministerio de Salud Pública, Atención integral en violencia de género, Norma técnica, 2014.

³⁸ Ministerio de Salud Pública, Atención integral en violencia de Género, norma técnica, 2014.

completa los procedimientos para la obtención y conservación de muestras (pruebas), su almacenamiento, según lo estipulado en el COIP, para garantizar la cadena de custodia de las evidencias. En delitos sexuales, éstas, son retiradas de manera inmediata por personal especializado del Sistema Integral de Investigación y medicina forense de la Fiscalía.

- Para realizar la atención cuando se detecta violencia sexual se dará prioridad como si fuera una emergencia, aunque no exista un riesgo para la vida. Se brindará un trato respetuoso y se derivará a las SPA.
- En las localidades en las que no se cuente con personal del sistema especializado de investigación del Sistema de Medicina legal ciencias forenses, pueden intervenir médicos del sistema público o privado, a solicitud del Fiscal. (Ley Orgánica de la Salud art 450).
- El COIP exige que las pericias deben ser ejecutada por profesionales calificados por el Consejo de la Judicatura. No obstante respecto a los exámenes que se practican en niñas, niños y adolescentes el Código de la Niñez y Adolescencia tiene una norma expresa que confiere valor pericial a dichos exámenes médicos legales y en donde no se requiere el estar previamente calificado (CNA, art. 80).

CNA art. 80. Exámenes médico legales.

Los exámenes médico legales a un niño, niña o adolescente, se practicarán en estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad e integridad física y emocional del paciente.

Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y recuperación, se prohíbe volver a someter a un niño, niña o adolescente víctima de alguna de las formas de maltrato o abuso señalados en este título, a un mismo examen o reconocimiento médico legal.

Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes, están obligados a conservar en condiciones de seguridad los elementos de prueba encontrados; y a rendir testimonio propio sobre el contenido de sus informes.

Los informes de dichos exámenes, realizados por profesionales de establecimientos de salud públicos o privados y entidades de atención autorizadas, tendrán valor legal de informe pericial.

Cabe indicar que, en el supuesto previsto en la norma del Código de la Niñez y Adolescencia y de acuerdo con el COIP, más adelante dentro del procedimiento penal el profesional deberá comparecer en calidad de testigo a la audiencia de juicio.

- 2. Derivar:** la actuación de los sujetos que detectan la situación de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, se limita a estas acciones iniciales y culmina con la derivación a las instancias respectivas. Esta acción se describe detalladamente en la etapa siguiente.

Pautas de actuación

La detección es un momento donde se requiere una actitud receptiva y respetuosa de la persona que detecta el hecho, para brindar confianza y seguridad.

En el interés superior del niño y con la finalidad de evitar la revictimización es necesario limitar las acciones que realiza la persona que conoce de primera mano la situación.

Por ello es importante tener presente: ¿Qué hacer en el momento de la detección? Y ¿qué evitar? A continuación, se presentan algunas pautas de actuación o “tips” para esta etapa.

¿Qué hacer?	¿Qué debemos evitar?
<p>Brindar auxilio inmediato: (en delito flagrante)</p> <p>Brindar el auxilio que necesite la niña, niño o adolescente.</p> <p>Considerar la necesidad de seguridad personal con protección policial y, de ser necesario, médica de emergencia.</p> <p>Derivar a los servicios requeridos inmediatamente. (Ecu 911/ Centros de Salud – Hospital).</p> <p>Resguardar los vestigios de la infracción que pudieren existir en el momento de la detección (prendas de vestir, objetos de la víctima, etc.)</p>	<p>Postergar la atención que la situación requiera, actuar oportunamente.</p>

<p>Escucha y registro de la información:</p> <p>Escuchar a la niña, niño, adolescente, en casos de develación sin indagar detalles ni interrogarlo/a.</p> <p>Se registra con fecha, hora, literalmente lo que ha comentado el niño, niña, adolescente, con los detalles que revele.</p> <p>Brindar a la niña, niño o adolescente confianza y seguridad. Tener actitud de apertura y respeto.</p> <p>El sujeto que detecta el hecho, escucha y registra el relato y lo ocurrido, y es responsable de esta información, la que debe manejarse con confidencialidad.</p>	<p>Dudar de su relato, y cuestionar su actuación.</p> <p>Juzgar lo ocurrido.</p> <p>Alarmar y generar un ambiente de angustia para el niño, niña o adolescente.</p> <p>Preguntar detalles y descripciones de ¿Cómo Fue?, esto puede generar más ansiedad y vergüenza, además que es una de las causas de la revictimización.</p> <p>Encarar a la víctima con el presunto agresor para que la verdad salga a la luz.</p> <p>Realizar acciones para las cuales no estamos preparados, remitir a los servicios especializados (atención o exámenes médicos, psicológicos, intervención en crisis, etc.)</p>
<p>Detección por sistema de salud:</p> <p>Dirigir los casos de violencia sexual a salas de primera acogida para aplicar los procedimientos respectivos. (Centros médicos que cuentan con SPA).</p> <p>Realizar evaluación y exámenes médicos requeridos. Brindar tratamiento médico y psicológico de emergencia según la norma de salud respectiva.</p> <p>Realizar exámenes médico legales de acuerdo al tipo de delito encontrado. Precautelar las pruebas. Según Norma del COIP.</p> <p>Intervención en crisis: En caso de requerirla, ésta será brindada por profesionales especializados.</p>	<p>La no activación de los respetivos protocolos ante la sospecha de violencia o delito contra niños, niñas o adolescentes.</p> <p>Realizar examen médico legal en caso de que la sospecha del tipo de delito no lo requiere.</p> <p>No brindar la atención médica adecuada, por no levantar la sospecha de posible delito sexual.</p>
<p>Brindar protección si es requerido: por motivos de seguridad, si en la develación por parte del niño, niña, adolescente, se conoce que el riesgo se mantiene por la presencia del agresor en el contexto familiar o cotidiano del niño, niña, adolescente, puede requerir medidas de protección emergente tales como: alejamiento del agresor, custodia familiar emergente, entre otras. Dichas medidas serán solicitadas por quien detecta esta amenaza.</p>	<p>Poner en alerta al posible agresor de las sospechas y de la develación del niño, niña, adolescente.</p>

3.7. ETAPA DE LA DERIVACIÓN

Definición

Para efectos de este procedimiento la derivación se refiere a la segunda etapa del procedimiento de protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Después de la detección, la persona o actor que detecta el hecho de violencia sexual, remite al niño, niña o adolescente a las instancias que tienen la atribución de brindar protección y realizar la investigación fiscal del hecho.

Para ello realiza el reporte del acto de violencia, y quien deriva solicita las medidas de protección que se requieran ante la autoridad administrativa o judicial correspondiente (Juntas cantonales de protección de Derechos de la niñez y adolescencia/ juzgados de la niñez).

En algunos casos, quien deriva dirige o acompaña a la persona para que efectúe la denuncia directamente ante los operadores del sistema de investigaciones y ciencias forenses o al fiscal.

En el caso de que el presunto sospechoso del acto de violencia sea servidor público, será necesario implementar el sumario administrativo para determinar si existe o no responsabilidad administrativa.

Alcance

La derivación procede luego de la detección del hecho de violencia o sospecha de posible delito sexual.

Comprende la derivación y activación del sistema de protección a través de la Junta Cantonal de Protección de Derechos quien adoptará las medidas de protección; y concluye con la presentación de la denuncia del hecho para la respectiva investigación fiscal.

Relevancia de la derivación

En la derivación el protagonista clave es aquel que detectó la violencia o sospecha la existencia de una infracción penal. La persona que detecta tiene la responsabilidad de denunciar y activar el sistema para la protección de la niña, niño, adolescente.

Además de ser una obligación legal, esta acción es fundamental ya que detiene el hecho de violencia sexual que esté sufriendo el niño, niña o adolescente, de no ser así es probable que continúe la situación de violencia con el respectivo daño para la persona del niño, niña o adolescente.

Es importante que la derivación se realice a quien tenga la competencia y atribuciones legales para brindar la atención que el niño, niña y adolescente requiere en este momento. Muchas veces pasa que se envía al niño, niña o adolescente a las instancias que no corresponden produciendo una mayor revictimización e incluso puede provocar el abandono del proceso.

La derivación oportuna y adecuada, garantiza la no repetición del acto de violencia, y la no aparición de otros tipos de delitos; y da pie a iniciar con el proceso de protección y restitución de los derechos de la niña, niño o adolescente que han sido violentados.

Actores que intervienen en la etapa de la derivación

- La persona, servidor público o profesional que detecta el posible delito.
- El Director/representante legal de la Institución donde se detectó el posible delito sexual.
- Policía Nacional/ Ecu 911
- Personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses
- Profesionales de la salud que en la atención detectan indicios o sospecha de infracción penal
- Fiscal
- Juntas cantonales de protección de derechos de niñez y adolescencia.
- Instituciones públicas o privadas que ejecutan las medidas de protección emergentes.

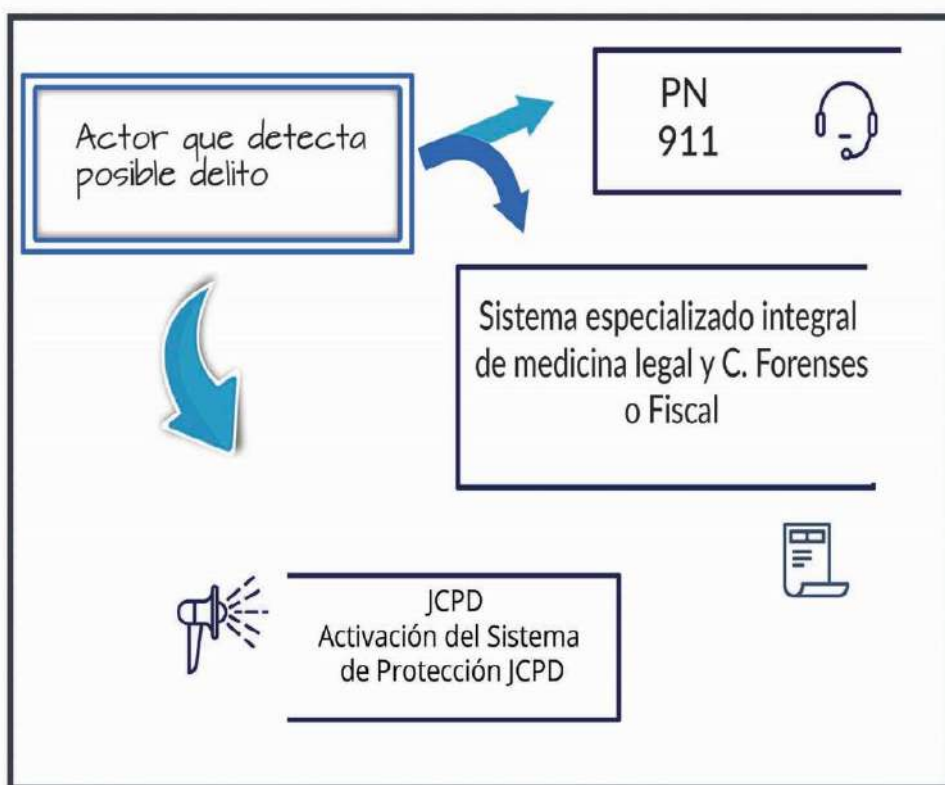
Actividades en la etapa de la derivación

Las acciones que se implementen en etapa de la derivación están centradas en la persona de la niña, niño y adolescente y es necesario tener en cuenta aspectos, como los siguientes:

- La detección flagrante de la infracción
- Necesidad de atención médica emergente
- Necesidad de resguardar indicios de la infracción y necesidades de realizar exámenes médicos legales, según el tipo de delito
- Necesidad de brindar seguridad personal a la víctima por la presencia del agresor.

La etapa de derivación comprende las siguientes acciones:

1. Derivación inmediata a la Policía Nacional/ Ecu 911 (delito flagrante).
2. Iniciar Proceso administrativo de protección de derechos.
3. Denuncia: Derivación a la fiscalía de los casos de sospecha de delito sexual en contra de niña, niño o adolescente para la respectiva investigación.
4. Ejecutar las medidas emergentes de protección (de carácter administrativas o judiciales).



Autora: Adriana Monesterolo Lencioni (2020)

Gráfico 6: Acciones en la derivación

1. **Derivación a la Policía Nacional/ ecu 911 ante delito flagrante:** En caso de **Delito flagrante**. La Policía Nacional brindará la seguridad personal a la niña, niño y adolescente y le acompañará ante la o el Fiscal. En ningún caso trasladará a la víctima junto con el presunto agresor.
2. **Procedimiento administrativo de protección de derechos:** si el delito no es flagrante, simultáneamente se pondrá en conocimiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, la situación de riesgo o violencia contra la niña, niño, adolescente. Corresponde a la autoridad administrativa dictar las medidas necesarias contempladas en el CONA.
3. **Reporte del hecho a personal del Sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses o al fiscal:** El Sistema de investigación y la o el Fiscal puede llegar a tener conocimiento de la *noticia críminis* por cualquier medio y no solamente por la denuncia. En el marco de este procedimiento cobra especial relevancia el reporte o informe que realizan los operadores o profesionales del sistema educativo o de salud, y por el cual se pone en conocimiento del acto de violencia. Para la niña, niño o adolescentes éstos son de suma importancia, ya que representa la posibilidad de detener el hecho de violencia. El informe, reporte o denuncia en sí mismos tienen un efecto positivo para su protección y cuidado; y además activa el sistema de protección de derechos y la investigación fiscal.

Es clave que el informe o reporte se realice y presente lo más rápidamente posible después de la detección, para que inicie la investigación fiscal y diagnóstico integral y se pueda contar con las medidas de protección (alejamiento, cautelares, etc.) que se requieran en este momento.

4. Ejecutar las medidas de protección emergentes: Las instituciones o instancias respectivas ejecutarán las medidas de protección emergentes dictadas por la autoridad para esta etapa y que en el CONA constan en el Artículo 79, quien será responsable de dar el seguimiento para su respectivo cumplimiento, dichas medidas pueden ser:

- Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida sólo podrá ser decretada por el Juez, quien la dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna;
- Custodia familiar o acogimiento institucional;
- Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de protección y atención;
- Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en contra de la persona agresora;
- Amonestación al agresor;
- Inserción del agresor en un programa de atención especializada;
- Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última; y de reingreso de la víctima, si fuere el caso
- Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de contacto con ella
- Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta, contra la víctima o sus parientes;
- Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña;
- Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se produjo el maltrato institucional, mientras duren las condiciones que justifican la medida;

- Participación del agresor o del personal de la institución en la que se haya producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o cualquier modalidad de eventos formativos³⁹

Pautas de actuación:

Para brindar la respuesta oportuna y prevenir la revictimización así como la pérdida de los indicios de infracción penal, es importante realizar la derivación a las instancias presentes en el territorio y con competencias para la intervención.

Para ello es necesario:

- Conocer las instituciones y servicios locales para la protección integral en el territorio. Se requiere contar con un mapeo de actores en cada territorio.
- Actuar de manera oportuna contactando con los agentes de protección, de ser necesario, así como con servicios de salud de manera emergente (en los casos que se requiera).

¿Qué hacer?	¿Qué debemos evitar?
<p>ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA:</p> <p>Al conocer la situación de violencia o sospecha de delito (si no es delito flagrante) es necesario iniciar el proceso administrativo de protección de derechos (ante la Junta de protección de derechos de niñez y adolescencia del cantón), para que se brinde la atención que requiera la niña, niño o adolescente de manera inmediata.</p> <p>Si el delito es flagrante, considerar la persona que detecta para determinar su intervención.</p> <p>Guardar la confidencialidad.</p>	<p>Normalizar la situación de violencia. No hacer nada.</p> <p>Minimizar la situación, ser indiferente ante la violencia o sospecha de delito.</p> <p>Nunca mediar y/o conciliar ante una situación de violencia.</p> <p>Comentar o difundir información sobre el hecho y la persona.</p>
<p>Mapeo local:</p> <p>Una acción importante en lo local es contar con un mapeo de los actores presente en el territorio, a fin de identificar a quienes se puede derivar considerando la situación de flagrancia o no, el posible delito y las atribuciones legales.</p>	<p>Remitir a referentes en lo local que NO tienen competencias.</p> <p>Excederse en las atribuciones que le corresponde a cada actor institucional.</p>

³⁹ Código de la Niñez y Adolescencia, Art.79.

<p>BRINDAR AUXILIO INMEDIATO:</p> <p>Evaluar situación</p> <p>Contactar con servicios de protección y auxilio; de ser requerido la protección policial (Ecu 911), o la intervención médica inmediata. Quienes intervengan elaborarán los reportes respectivos.</p> <p>Mantener la confidencialidad.</p> <p>Valorar el riesgo a la integridad personal de la niña, niño o adolescente.</p> <p>Policía Especializada DINAPEN, Policía Nacional deberá brindar el auxilio y levantará el parte respectivo sobre el acto de violencia y las circunstancias, protegiendo los indicios existentes y enviará a Fiscalía para que se inicie el proceso de investigación fiscal.</p> <p>Disponer medidas de protección que reguarden la seguridad personal de la niña, niño o adolescente, art. 79 del CONA</p>	<p>Que la niña, niño o adolescente sea sometido a varios interrogatorios por diferentes actores de la institución o la comunidad antes de brindar la ayuda.</p> <p>Adoptar medidas de protección que puedan ser asumidas por la niña, niño o adolescente, como si fuera responsable de la situación de violencia. (</p> <p>Alejar o separar a las niña, niño o adolescente de su hogar o entorno familiar y comunitario, si no hay un riesgo evidente.</p> <p>PN, DINAPEN, Ecu 911, no deben desatender o no acudir ante una llamada de auxilio por sospecha de delito o por solicitud de protección inmediata para la seguridad de niños, niñas o adolescentes posibles víctimas de violencia sexual.</p>
<p>DENUNCIA:</p> <p>Realizar la denuncia, para que se inicie la investigación fiscal, por la sospecha de delito.</p> <p>Cumplir con el deber jurídico de denunciar, por parte de servidores públicos y demás que por su profesión u oficio llegan a tener conocimiento de la situación.</p> <p>Al poner en conocimiento de la autoridad competente, indicar que existen indicios o sospecha de una infracción de naturaleza penal.</p> <p>Referirse al presunto autor, utilizando la expresión sospechoso o presunto autor.</p>	<p>Abstenerse de denunciar cuando se está obligado a hacerlo.</p> <p>Persuadir a miembro de la familia para que presenten la denuncia, en lugar de hacerlo quien detectó y tiene la obligación legal.</p> <p>Persuadir o convencer a la niña, niño o adolescente de no denunciar el hecho ni a la persona que cometió el hecho.</p> <p>Divulgar información sobre la persona del niño, niña o adolescente y sobre el hecho por respeto a la confidencialidad.</p> <p>Tipificar el delito, puesto que esto le corresponde a la Fiscalía.</p> <p>Señalar como autor de delito a una determinada persona, por la presunción de inocencia en su favor.</p>

<p>DICTAR Y EJECUTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN (Art. 79 CNA)</p> <p>No le corresponde a la Junta Cantonal de Protección de Derechos decidir si existe delito o no, únicamente deberá ordenar las medidas de protección. En caso de sospecha de infracción penal, deberá poner en conocimiento de la Fiscalía, sin perjuicio de continuar con lo relativo a las medidas de protección.</p> <p>La Junta Cantonal de Protección de Derechos deberá indicar de manera clara y concreta las medidas de protección que adopte y su objetivo; y designar de manera diferenciada cada uno de los responsables de su ejecución y cumplimiento</p> <p>Si se han dictado medidas de protección en esta etapa, la institución o actor deberá ejecutar las medidas de protección de acuerdo a su competencia.</p>	<p>Confundir la adopción de medidas de protección con cualquier tipo de atribución de responsabilidad al presunto agresor. Las Medidas de Protección NO implican decidir sobre la existencia del delito ni sobre la responsabilidad penal del presunto agresor.</p> <p>Decidir en el procedimiento de protección de derechos para la adopción de medidas de protección, sobre la responsabilidad del posible agresor (esto implica un procedimiento administrativo a cargo de la Junta de carácter sancionatorio que es independiente).</p> <p>Limitar su intervención a dictar medidas, descuidando el seguimiento de su ejecución y evaluación.</p>
---	---

3.8. ETAPA DE LA ATENCIÓN

“Herman refiere que puede ser muy tentador ponerse del lado del perpetrador. Lo único que necesita este es que no se haga nada. Sin embargo, la víctima demanda acción, involucramiento y memoria, y desde ese lugar invita a los otros a compartir la carga insoportable de su dolor.”⁴⁰

Definición

Para efecto de este procedimiento especial de actuación unificada, la tercera etapa se refiere a la Atención integral del niño, niña o adolescente afectada/o por la violencia o delito de carácter sexual, la misma que está orientada a posibilitar la reparación del daño y la restitución de los derechos que han sido vulnerados.

Inicia con la derivación del posible delito hasta la ejecución de medidas de protección y la restitución de sus derechos.

En los casos que se cuente con una sentencia esta etapa llegará hasta la finalización del proceso y busca lograr la reparación integral.

⁴⁰ Baita Sandra, Moreno Paula, Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes para su tratamiento en la Justicia, Unicef Uruguay 2015.

Dichas acciones de protección deberán ser ejecutadas a partir de las medidas dictadas y con seguimiento de la autoridad competente

Alcance

Inicia cuando la autoridad tiene conocimiento del posible delito a partir de la denuncia de la

Concluye con la ejecución de las medidas y protección de los derechos de la niña, niño y adolescente.

Relevancia

- Es una etapa importante porque activa mecanismos, acciones, servicios y programas de prevención, protección y restitución de derechos de la niña, niño y adolescente en el territorio, de acuerdo a su singularidad, necesidades y requerimientos específicos.
- Permite contar con un diagnóstico inicial personal y del entorno, para conocer la situación actual y valorar el daño encontrado. Este diagnóstico guía las acciones de las autoridades para dictar las medidas requeridas.
- Con la violencia sexual muchas de las áreas o ámbitos personales y de convivencia de la niña, niño, adolescente se encuentran afectadas en mayor o menor grado. En la etapa de atención se busca brindar el tratamiento, atención especializada para posibilitar la recuperación y el bienestar de la niña, niño, adolescente víctima de violencia sexual. El tiempo requerido puede variar incluso llegar a demorar varios meses o años de intervención.
- Cada instancia debe desempeñar adecuadamente su trabajo en la mirada de sistema y de proceso porque el niño, niña o adolescente, necesita la atención de varios actores para la restitución de sus derechos y la reparación del daño en las distintas áreas afectadas.
- Es relevante porque a través de acciones, escucha, encuentros, cuidado, se devuelve la dignidad, el protagonismo y la autovaloración personal a un niño, niña, adolescente que ha sido ofendido, humillado, acosado, maltratado o vulnerado en su derecho de vivir una vida sin violencia.

Actores en la etapa de la atención

Autoridad competente que dicta la Medida de Protección:

- Junta Cantonal de Protección de Derechos
- La jueza o el Juez, por petición de la fiscal o fiscal a cargo de la investigación previa.

Actores institucionales que ejecutan las medidas de protección:

- Policía nacional
- Policía Especializada en niñez y adolescencia, DINAPEN
- Servicios de protección integral, SPI
- Entidades de atención públicas y privadas que cuenten con programa registrado para la ejecución de medidas de protección a niñas, niños y adolescentes en el MIES.
- Instituciones de sistema educativo, Ministerio de Educación
- Instituciones del sistema de salud, MSP y redes complementarias
- Clubes, asociaciones deportivas reconocidas por el Ministerio del Deporte.
- Organizaciones públicas o privadas del territorio.
- Familia

Momentos / Actividades a realizar en la etapa de atención

En la etapa de atención se incluyen las acciones relevantes. Algunas tienen relación con la protección integral al niño, niña, adolescente, otras con el proceso de responsabilidad del agresor (administrativa y/o penal). En conjunto permiten la recuperación, reparación de la víctima. Se refieren a las siguientes:

- Diligencias investigativas a cargo de la o el fiscal (investigación previa)
- Ejecución de medidas de protección al niño, niña, adolescente
- Proceso administrativo en contra del agresor, si corresponde
- Procedimiento penal para la determinación de la responsabilidad penal
- Reparación integral, cuando el juicio penal ha concluido en sentencia condenatoria y se han dictado medidas para la reparación integral de la niña, niño o adolescente.

1. La Investigación fiscal

Después de la detección del posible delito sexual, es fundamental realizar la investigación fiscal con la realización de las diligencias que sean necesarias para determinar la existencia de la infracción penal.

En el proceso de investigación fiscal se ve indispensable un adecuado diagnóstico integral, que debe contener elementos de la evaluación del niño, niña, adolescente y del entorno (examen del entorno social).

Este diagnóstico es fundamental en este momento por dos consideraciones clave:

- Permite contar con pautas y datos específicos de los efectos que ha tenido para la niña, niño, adolescente el hecho de violencia sexual, así como valorar el daño a corto mediano y largo plazo. Esta información permite dictar las medidas de protección más adecuadas y necesarias y propiciar la reparación integral.

- Constituye una forma de prevenir la repetición del acto de violencia contra la niña, niño, adolescente que ya ha sido víctima o con otros del entorno, ya que al contar con un diagnóstico preciso, aporta datos relevantes para disminuir factores de riesgo.

Por ejemplo, en la investigación de un posible delito sexual en contra de una niña, niño o adolescente por parte de un maestro en el centro educativo, se puede identificar otras niñas y niños que pueden encontrarse en el entorno cotidiano del posible agresor y estar en situación de riesgo.

De particular relevancia en la investigación de los delitos contra la integridad sexual es el **testimonio de la niña, niño y adolescente y que requiere de una escucha especializada**⁴¹. El testimonio es central por la característica de estos delitos que se realizan y mantienen en la clandestinidad. Se deberá realizar la diligencia del testimonio anticipado de la niña, niño y adolescente durante las primeras semanas de la detección del acto de violencia; en caso de tratarse de delito flagrante, se deberá asegurar un mínimo de estabilidad emocional para que la niña, niño y adolescente pueda brindar su testimonio, de manera que el acto de relatar lo sucedido no le genere mayor estrés, conflicto o bloqueos emocionales.

El protocolo de entrevista forense para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual a través de la escucha especializada, es un instructivo completo que intenta asegurar que la niña, niño y adolescente pueda brindar su testimonio de los hechos, al entrevistador, de manera reservada, protegida y sin revictimización. Asegura que dicho testimonio anticipado sea recogido como prueba en el proceso penal.

De ser requerido se brindará intervención en crisis por personal especializado para disminuir el impacto inicial del hecho y poder recibir el testimonio en la entrevista forense.

En cuanto a los exámenes y diagnósticos en salud, es importante realizar los exámenes médico legales de acuerdo al tipo de delito investigado y no solicitarlos en todos los casos de violencia contra niñas, niños, adolescentes, porque es una experiencia que afecta a su intimidad. No se repetirá el examen médico legal en niñas, niños y adolescentes, como se indica en artículo 80 del Código de la Niñez y Adolescencia.

Sin perjuicio de lo dicho, deberán hacerse otras diligencias con el apoyo de peritos que puedan determinar el diagnóstico integral de la niña, niño y adolescente y su contexto. Los efectos y el daño pueden presentarse en varias áreas de su desarrollo. Algunas pueden estar más comprometidas o afectadas que otras.

Retractación

Después del develamiento o durante la investigación del hecho puede darse en algunos casos la retractación por parte del niño, niña o adolescente. También podría ocurrir que el relato o los hechos descritos inicialmente sean minimizados o negados por completo.

⁴¹ Se recomienda tener en cuenta el Protocolo sobre escucha especializada.

Esto puede tener relación con las fuertes y variadas presiones a las que se ve sometida la niña, niño o adolescente y le genera una sensación de que no hay salida y que no cuenta con protección. Es un intento de neutralización de los efectos que empiezan a ocurrir luego de la develación.

Cuando la violencia sexual se produce dentro de la familia o en un ambiente cercano (como por ejemplo el aula de clases), el develamiento de hechos puede generar una crisis. Cuando la víctima confirma que no le creen, que no hay protección o salida posible, alguien le dice que no debe comentar el hecho a nadie, o percibe que las consecuencias negativas generan una extrema presión porque las amenazas podrían llevarse a cabo, es posible que se de el retractamiento.

Existe miedo y culpa en la víctima porque así lo ha reforzado el agresor y por un determinado contexto social y cultural.

2. Atención a través de ejecución de Medidas de protección del niño, niña, adolescente

La aplicación de Medidas de protección debe ser entendida como un proceso para reparar progresivamente el daño en la niña, niño, adolescente víctima de violencia sexual y no como la ejecución aislada de alguna medida única que no es evaluada ni tiene seguimiento por parte de la autoridad que la dispone.

La ejecución de las medidas de protección aporta a la niña, niño, adolescente los elementos para ir superando el daño porque: brindan auxilio y protección emergente, alejan al posible agresor de la niña, niño, o adolescente, detienen la violencia y permiten prevenir nuevos hechos o delitos, protegen a otras niñas, niños, adolescentes de sufrir el mismo riesgo. Brindan la posibilidad de recuperación física y emocional. Promueven la integración social y educativa en entornos seguros. Y ubican la responsabilidad en el agresor y no en el niño, niña, adolescente.

Para que las medidas puedan responder adecuadamente a la necesidad de la niña, niño o adolescente, es necesario comprender mejor el efecto de la violencia sexual en las niñas, niños, adolescentes afectados.

- **Efecto de la violencia sexual en las niñas, niños o adolescentes**

La violencia sexual tiene efectos en la persona de la niña, niño, adolescente, en varias áreas o ámbitos personales, familiares y también tiene un impacto social.

“el abuso sexual deja secuelas psíquicas a corto, mediano y largo plazo, y en ocasiones también físicas (desde heridas, laceraciones genitales hasta enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados). El impacto traumático puede variar en función de la edad del niño, tipo de vínculo con el ofensor, la existencia de violencia o no durante el hecho, de la actitud del padre o madre protector, de la existencia de otros problemas familiares -tales como alcoholismo, adicciones, violencia conyugal, enfermedades psiquiátricas -, del número de ofensores sexuales, del tiempo que haya

durado el abuso. Estos factores mediadores del impacto traumático podrán atenuar o acrecentar la sintomatología y su gravedad.”⁴²

Dentro de la afectación psicológica de manera referencial se puede observar:

- TEA: síntomas de trastorno de estrés agudo (desde 3 días a 1 mes posterior al hecho)
- TEPT: síntomas de trastorno de estrés postraumático, con una aparición desde 1 mes a 6 meses posterior al evento. (con o sin síntomas disociativos)
- Trastornos de Conducta: inhibición, agresividad, conducta sexualizada, retraimiento, etc.
- Trastornos ansiedad: síntomas de angustia, ansiedad, pesadillas, enuresis, etc.
- Trastornos depresivos: síntomas de abatimiento, desesperanza, tristeza, apatía, agresividad, etc.
- Rasgos de personalidad: inseguridad, dependencia, inhibición, impulsividad, etc.

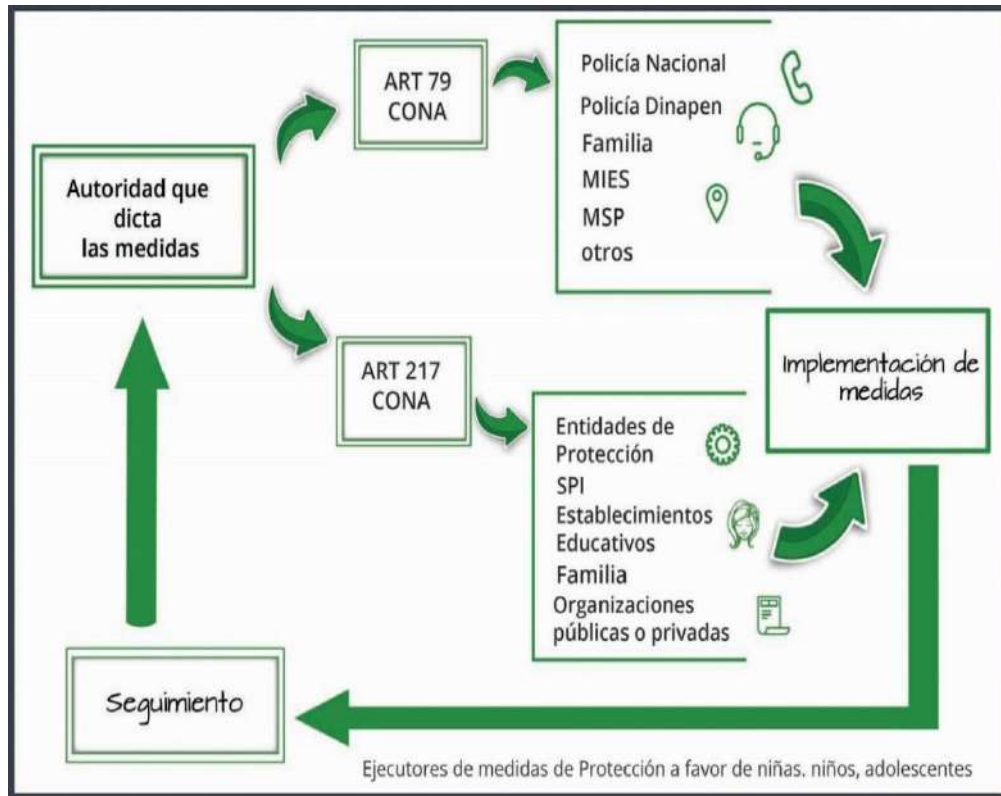
A nivel familiar también se puede identificar una afectación indirecta de los miembros de la familia, apareciendo emociones de angustia, culpabilidad, vergüenza, desesperanza, síntomas de ansiedad, TEPT, etc.

La recuperación del daño, requiere de un ambiente familiar y cotidiano protector, que fortalezcan las condiciones de salud y no sea revictimizante, represivo o desesperanzador para el niño, niña, adolescente. Por ello en el diagnóstico debe incluir un estudio del entorno para responder con las medidas más adecuadas por el interés superior del niño.

a. **Medidas de protección:** para que las medidas dictadas puedan aportar en la recuperación de los daños deben tener las siguientes características:

- Integrar acciones inmediatas y de proceso
- Estar centradas en el niño, niña, adolescente
- Realizar seguimiento y acompañamiento
- Dar Prioridad absoluta a la niña, niño, adolescente

⁴² Baita Sandra, Moreno Paula, Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes para su tratamiento en la Justicia, Unicef Uruguay 2015.



Autora: Adriana Monesterolo Lencioni (2020)

Gráfico 7: Ejecutores de Medidas de Protección a favor de niñas, niños y adolescentes

Recursos para la reparación integral por violencia sexual en contra de niñas, niños o adolescentes

Existen varios factores o condiciones que posibilitan la reparación del daño producido en los niños, niñas, adolescentes. Las medidas de protección deben tener relación y tomar en cuenta estos factores para que su efecto sea más efectivo.

Dentro de estos recursos o factores pueden estar:

- a. Entorno protector: detener relaciones abusivas o de violencia, alejar al agresor del contexto cercano al niño, niña adolescente. Entorno confiable y esperanzador.
- b. Brindar relaciones donde no exista abuso de poder ni asimetría.
- c. Apoyar al niño, niña, adolescente para que pueda reconocerse como víctima y ubique la responsabilidad en el agresor. Desculpabilizar al niño, niña adolescente por la situación.
- d. Visibilización de la persona: la violencia sexual, genera un sentimiento de ser invisible, de no existir y de ser invadido. Por ello toda la intervención y el

procedimiento debe rescatar la voz y opinión, derechos del niño, niña, adolescente, como centro del proceso de protección, devolviendo su lugar central y su dignidad.

- e. Flexibilidad en trámites, dentro de lo establecido en la ley, facilitar procedimientos de acuerdo a las necesidades específicas, dar atención oportuna, etc.

Medidas de protección y su vinculación con la reparación integral

Los criterios que deberán tomarse en cuenta para dictar las medidas de protección en esta etapa son:

- Contexto en que se realizó el acto de violencia riesgos y vulnerabilidad.
- Afectación y daño en el niño, niña, adolescente en los diferentes ámbitos de desarrollo personal y de contexto basado en los diagnósticos y pericias médicas y psicosociales y demás estudios realizados. Se debe realizar un análisis de estos elementos de manera integral y no de forma aislada.
- Considerar la afectación a corto, mediano y largo plazo para brindar una reparación que equilibre la vulneración y el daño producido.
- Es deber del Estado tener en cuenta la intersección de varias formas de violencia y discriminación. Al juzgar los hechos de violencia, debe considerar factores de riesgo tales como: condición socio económica, edad, etnia, ocupación, etc. Para adoptar las medidas de reparación adecuadas y diferenciadas. En relación con la población infantil, es un factor adicional de riesgo para sufrir abuso sexual según la OMS, el hecho de ser niño o niña. Según sus cifras 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufre abuso sexual en la infancia.⁴³

Pautas de actuación

¿Qué hacer?	¿Qué debemos evitar?
EJECUTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN: El actor de acuerdo a sus competencias deberá ejecutar las medidas de protección que han sido dictadas por la autoridad en cada fase del proceso.	Juzgar los hechos. Excederse en sus funciones o ejecutar acciones para las cuales no está capacitado.

⁴³ Consejo de la Judicatura (2017), Herramienta para la aplicación de estándares jurídicos sobre los derechos de las mujeres en las sentencias.

<p>Realizar actuaciones oportunas, respetuosas e integrales.</p> <p>Guardar la confidencialidad.</p>	
<p>Atención médica emergente</p> <p>Derivar a SPA cuando haya la sospecha de violencia sexual en contra de niñas, y se cuente con este servicio.</p> <p>Activar protocolos de salud ante la sospecha de violencia sexual tanto para la realización de exámenes médicos requeridos como para aplicación de los tratamientos médicos emergentes.</p> <p>Guardar la confidencialidad</p> <p>Elaborar los informes y reportar situación inmediatamente a personal del sistema de investigación o fiscal.</p>	<p>En ningún caso, negar la atención médica emergente.</p>
<p>Seguimiento:</p> <p>Las organizaciones encargadas de ejecutar las medidas de protección deberán emitir informes completos que evidencien la realidad objetiva.</p> <p>La autoridad que dicta las medidas realizará el seguimiento y verificación de adecuación de las medidas dictadas y ejecutadas</p>	<p>Realizar valoraciones subjetivas que puedan perjudicar la evaluación de las medidas aplicadas.</p> <p>Evitar realizar funciones o acciones de protección fuera de su competencia o especialidad.</p>
<p>Investigación fiscal</p> <p>Asegurar la prioridad en la investigación; y actuar de la debida diligencia durante la investigación previa.</p> <p>Identificar y las diligencias más idóneas para probar la existencia de la infracción penal; y realizarlas oportunamente.</p> <p>Descartar la ejecución de diligencias que no aporten para demostrar la infracción por el tiempo transcurrido o por no ser las idóneas.</p> <p>Seleccionar las medidas de protección que sean pertinentes para el proceso del niño</p> <p>Solicitar las medidas de protección a la jueza o juez</p>	<p>Realizar o repetir exámenes no requeridos.</p> <p>Dilatar investigación pre procesal penal.</p>

<p>Medidas de Protección en ámbito penal</p> <p>Seleccionar la medida de protección, considerando la opinión del niño y velando por su interés superior.</p> <p>Dictar las medidas solicitadas por la o el Fiscal de manera inmediata.</p>	<p>Dilatar la decisión respecto a las medidas de protección.</p>
<p>La valoración del testimonio anticipado de la niña, niño y adolescente</p> <p>Considere como principio la credibilidad del relato del niño⁴⁴.</p> <p>Tome en cuenta el desarrollo evolutivo de un niño y que la ubicación espacio temporal ni un niño, niña y adolescente NO es igual que la de un adulto.</p>	<p>Juzgar este testimonio con los mismos criterios que si fuese un adulto.</p>

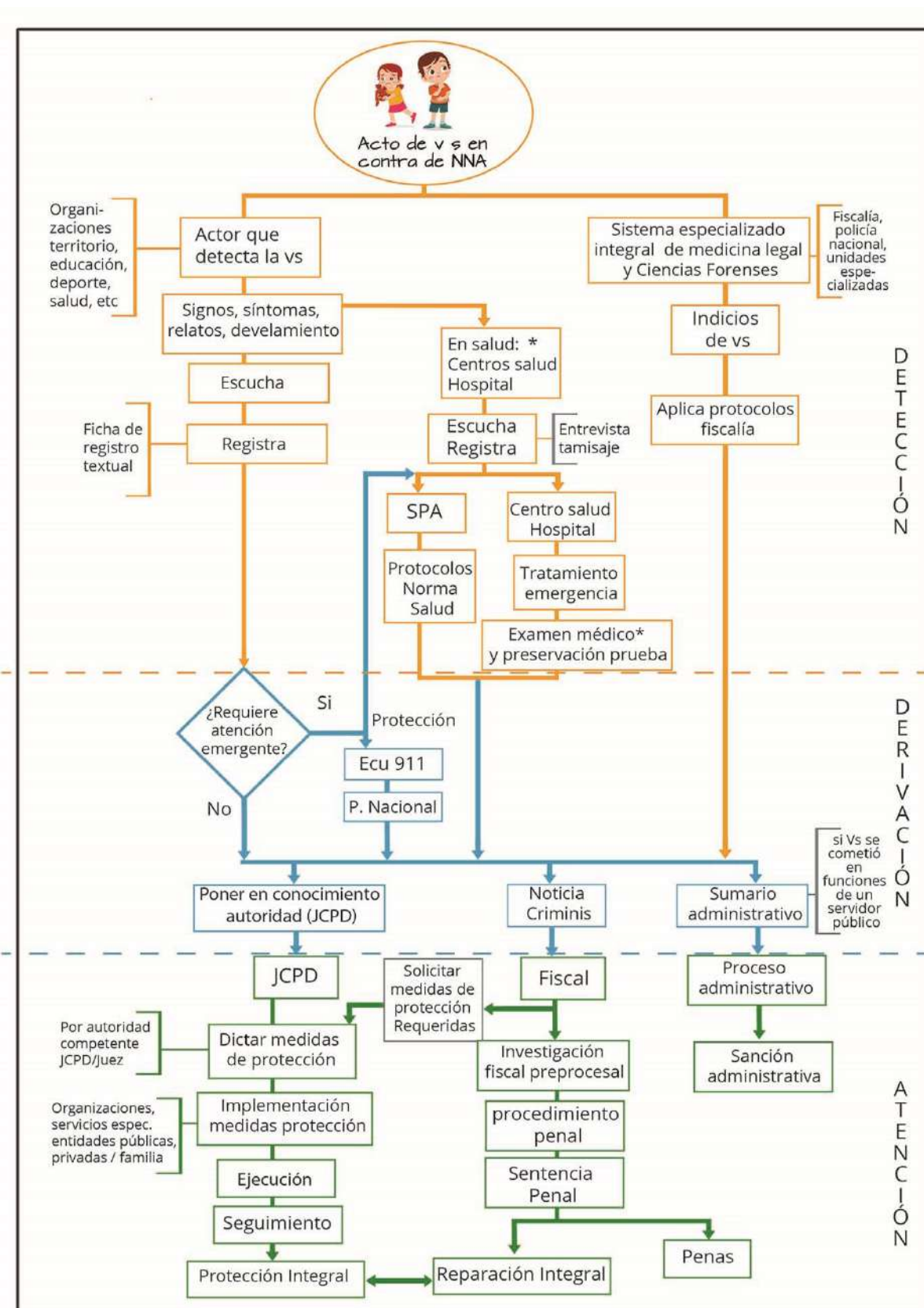
3.9. FLUJOGRAMA DE UNIFICACIÓN DE LAS TRES ETAPAS: DETECCIÓN, DERIVACIÓN Y ATENCIÓN

A modo de síntesis y para que se pueda visualizar de una manera completa e integral, se presenta un flujograma que recoge las tres etapas descritas y desarrolladas anteriormente.

La presentación en colores tiene como finalidad distinguir cada etapa, a la vez que facilita su reconocimiento y comprensión. Se ha elegido el color NARANJA para la etapa de detección, el color AZUL para el de derivación y el VERDE para la etapa de atención. Esta división en colores permite identificar los actores en cada una de las etapas y su articulación. No se describen las actividades porque constan en cada una de las etapas.

Finalmente, la visualización completa del flujograma permite que cada actor tenga una comprensión global de todo el procedimiento especial de actuación unificada y no sólo de la parte que le corresponde. Es importante que cada actor tenga la visión completa del **procedimiento especial de actuación unificada** para que se descubra como una parte relevante dentro del mismo, y que tenga conciencia de la necesidad de cumplir con sus funciones de manera oportuna y efectiva para lograr la reparación integral de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

⁴⁴ Estudios indican que falsos alegatos se refieren entre 1 y 3% y que se presentan especialmente en separaciones o divorcios conflictivos.



Autora: Adriana Monesterolo Lencioni (2020)

Gráfico 8: Flujograma de unificación de las tres etapas: detección, derivación y atención

BIBLIOGRAFÍA

Libros:

Simon F. (2009), Derecho de la Niñez y Adolescencia De la Convención sobre los Derechos del Niño a las Legislaciones Integrales, Tomo I, Quito, Ecuador, Cevallos.

Baita S., Moreno P. (2015), Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes para su tratamiento en la Justicia, Unicef Uruguay.

Jurisprudencia:

Corte Constitucional, Sentencia N.9-17-CN de 9 de julio de 2019.

Normativa:

Constitución de la República del Ecuador

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia

Ley Orgánica de Educación Intercultural

Código Orgánico Integral Penal

Código Orgánico de la Función Judicial

Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público

Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad

Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (R.O. Suplemento 107 24 diciembre de 2019)

Convención sobre los Derechos del Niño

Consejo Económico Social de Naciones Unidas, Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, 2005.

Decretos Ejecutivos

Decreto Ejecutivo 580 de 23 de agosto, publicado en el Registro Oficial No. 158 del 29 de agosto del 2007.

Decreto Ejecutivo 1356 de 12 de noviembre de 2012.

Decreto Ejecutivo 560 publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 387 de 13 de diciembre de 2018

Decreto Ejecutivo 718 publicado en el Registro Oficial Nº 483 Suplemento de 8 de mayo de 2019

Decreto Ejecutivo 718 publicado en el Registro Oficial Nº 483 – Suplemento de 8 de mayo de 2019

Resoluciones

Consejo de la Judicatura, Resolución 116 Registro Oficial Edición Especial 699 de 04 de enero de 2019.

Fuentes en internet:

<https://www.derechoshumanos.gob.ec/subsecretaria-prevencion-y-erradicacion-de-la-violencia-contra-mujeres-ninas-ninos-y-adolescentes/>

ANEXOS

ANEXO 1: Sistemas en la Constitución del Ecuador

SISTEMA	OBJETIVOS DEL SISTEMA
INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL	<p>“El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo” (CRE Art. 340).</p> <p>El Estado debe generar las condiciones para la protección integral de sus habitantes priorizando a aquellos grupos que requieran consideraciones especiales por la persistencia de desigualdad, exclusión, discriminación o violencia o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad (CRE Art. 341).</p>
PROTECCIÓN INTEGRAL	<p>El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias (CRE, Art. 341)</p> <p>“Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia es un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia; define medidas, procedimientos, sanciones y recursos, en todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en este Código, la Constitución Política y los instrumentos jurídicos internacionales” (CNA, Art. 190)</p>
EDUCATIVO	<p>“El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema”. (CRE Art.344)</p>
SALUD	<p>“El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional”. (CRE Art.358)</p>
SEGURIDAD HUMANA	<p>“El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.” (CRE. Art. 393)</p>

Autora: Adriana Monesterolo Lencioni (2020), Fuente Constitución de la República del Ecuador y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

ANEXO 2: Sistemas para la administración de justicia

SISTEMA ESPECIALIZADO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN PREPROCESAL O EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO PENAL	SISTEMA-MEDIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA
<p>CRE, art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; [...]</p> <p>Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.</p>	<p>COIP art. 448. “Organización y dirección. En materia preprocesal y procesal penal, la Fiscalía organizará y dirigirá el Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses que prestará servicios especializados de apoyo técnico y científico a la administración de justicia. El Sistema contará con el apoyo del organismo especializado de la Policía Nacional y personal civil de investigación, quienes llevarán a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este Código, ejecutarán sus tareas bajo la dirección de la Fiscalía y dependerán administrativamente del ministerio del ramo”.</p>	<p>CRE, art. 175. “Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. [...]”.</p>
	<p>COFJ, art. 295. “SISTEMA DE PROTECCION DE VICTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL.- La Fiscalía General del Estado organizará y dirigirá el Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal. La máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado establecerá mediante el reglamento respectivo la organización y los procedimientos adecuados para su implementación</p> <p>COIP Art. 445.- Organización.- La Fiscalía dirige el Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, a través del cual todos los partícipes en la investigación preprocesal o en cualquier etapa del proceso, podrán acogerse a las medidas especializadas de protección y asistencia para precautelar su integridad y no revictimización, cuando se encuentren en peligro. Este Sistema contará con los recursos necesarios provenientes del Presupuesto General del Estado, para su eficiente gestión”.</p>	<p>COFJ, art. 18. “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”.</p>

Autora: Adriana Monesterolo Lencioni (2020), Fuentes: Constitución y leyes de la República del Ecuador (CONA, COFJ, COIP, COESCOP).